



**Consejo Económico  
y Social**

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/2003/24  
30 de enero de 2003

ESPAÑOL  
Original: ESPAÑOL/FRANCÉS/  
INGLÉS

---

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
59º período de sesiones  
Tema 6 del programa provisional

**EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA  
Y TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN**

**Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas  
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas  
conexas de intolerancia, de conformidad con la resolución 2002/68 de  
la Comisión de Derechos Humanos\***

---

\* El presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales; el anexo se reproduce como se presentó, en los idiomas originales.

## Resumen

El presente informe contiene datos sobre las actividades del Relator Especial desde su entrada en funciones, el 26 de julio de 2002. Durante este período el Relator ha establecido contactos con diversos gobiernos, grupos políticos regionales (el Grupo de Estados Africanos, el Grupo de Estados Árabes, el Grupo de los 77) y organizaciones intergubernamentales (Unión Europea, Organización de los Estados Americanos, Organización de la Conferencia Islámica) y no gubernamentales, con objeto de promover una dinámica consensual en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

El informe da cuenta de graves denuncias de discriminación racial y xenofobia, por ejemplo en Côte d'Ivoire y en Guyana. Se ponen de relieve la discriminación racial que sufren los romaníes/sintis/nómadas, y las medidas adoptadas a nivel europeo para remediar este problema, así como las manifestaciones de antisemitismo.

En 2002, el Relator Especial examinó denuncias de discriminación racial y xenofobia en Alemania, España, la Federación de Rusia, Grecia, Guyana y el Reino Unido. Estas denuncias, así como las respuestas de las autoridades de los países interesados y las observaciones del Relator al respecto, figuran en el anexo del presente informe.

A modo de conclusión, el Relator Especial subraya que en sus primeros contactos con representantes de gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales ha quedado claro que es urgente poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción de Durban para hacer frente a la alarmante intensificación de las manifestaciones de racismo ordinario y a la aparición de nuevas formas insidiosas de discriminación y racismo. El Relator subraya también la persistencia, especialmente inquietante, de situaciones de confusión consciente o amalgama entre raza, religión y cultura que precisan de respuestas urgentes y acciones en profundidad. En consecuencia el Relator, a la vista del documento final de la Conferencia de Durban (A/CONF.189/12), propone una doble estrategia, jurídica y política (mediante la ratificación y la aplicación de todos los instrumentos y acuerdos internacionales pertinentes) e intelectual y ética (basada en el mejor conocimiento y comprensión de las raíces profundas, los procesos y los mecanismos de la cultura y la mentalidad discriminatorias). Se trata de establecer un estrecho vínculo, mediante la reflexión y la acción, entre la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia y la intolerancia y la promoción urgente del diálogo entre las culturas, las civilizaciones y las religiones. A este respecto el Relator hace las siguientes recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos:

- Debe fomentarse la complementariedad y la cooperación entre todos los mecanismos de la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia, en particular los relativos a la aplicación del documento final de la Conferencia de Durban, así como entre el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial y entre los propios relatores especiales.
- Hay que prestar mayor atención a las situaciones y las prácticas discriminatorias de que son víctimas los no nacionales, los migrantes y los refugiados.
- En las deliberaciones de la Comisión deben tenerse más en cuenta las raíces profundas, intelectuales y éticas de la cultura y la mentalidad racistas y discriminatorias.

- Hay que conceder un lugar preponderante al diálogo entre las civilizaciones, las culturas y las religiones, como mayéutica de superación de todas las formas de discriminación, rechazo e intolerancia.
- Hay que privilegiar la educación en todas sus dimensiones (la enseñanza, en particular de la historia, la ética, los derechos humanos como ética universal, las culturas y los valores comunes de todas las religiones y tradiciones espirituales), así como la información y la comunicación intercultural.

Debe promoverse el valor fecundo del pluralismo, entendido como el reconocimiento, la aceptación, el respeto y la promoción de la diversidad. En este contexto, es necesario promover el concepto ambivalente de identidad, que puede ser la afirmación legítima de una especificidad, pero también la negación del otro.

## ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN.....	1 - 3	6
I. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL .....	4 - 27	6
A. Consultas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos .....	4 - 5	6
B. Participación en el Seminario Regional de Expertos para África, sobre la aplicación del Programa de Acción de Durban.....	6 - 7	7
C. Participación en los trabajos del quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General.....	8 - 20	7
D. Participación en la Conferencia Mundial de Africanos y Descendientes de Africanos contra el Racismo .....	21 - 23	11
E. Participación en la semana brasileña de la conciencia negra.....	24	12
F. Participación en el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana .....	25 - 27	13
II. MANIFESTACIONES CONTEMPORÁNEAS DEL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA.....	28 - 38	13
A. Racismo, discriminación racial, xenofobia en política .....	28 - 32	13
1. Situación en Côte d'Ivoire .....	28 - 30	13
2. Situación en Guyana .....	31 - 32	14
B. Discriminación racial contra los romaníes/sintis/gitanos/nómadas .....	33 - 37	15
C. Antisemitismo.....	38	16
III. DENUNCIAS TRATADAS POR EL RELATOR ESPECIAL.....	39	16
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	40	16

**ÍNDICE** (*continuación*)

*Anexo:* Réponses Aux Allégations Communiquées Aux Gouvernements Par Le Rapporteur Spécial

- A. Allemagne
- B. Espagne
- C. Fédération de Russie
- D. Grèce
- E. Guyane
- F. Royaume Uni

## INTRODUCCIÓN

1. El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia fue confirmado en sus funciones por el Consejo Económico y Social el 26 de julio de 2002.
2. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 2002/68 (IV), aprobada por la Comisión de Derechos Humanos en su 58º período de sesiones, el 25 de abril de 2002.
3. En este informe el Relator Especial da cuenta de las actividades que ha emprendido después de su designación (cap. I), y describe las principales manifestaciones de racismo y de discriminación racial de que ha tenido conocimiento (cap. II), así como las denuncias de discriminación racial hechas a los gobiernos (cap. III). El Relator presenta sus conclusiones y recomendaciones en el capítulo IV. Las denuncias examinadas por el Relator y las respuestas recibidas de los gobiernos figuran en el anexo al informe.

### I. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL

#### A. Consultas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

4. Entre el 7 y el 9 de agosto de 2002, el Relator Especial visitó la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra, para familiarizarse con las actividades de los diferentes programas y mecanismos de protección de estos derechos. Sus reuniones con el Relator Especial sobre la vivienda, así como con los funcionarios encargados de la asistencia a los procedimientos especiales relativos a los migrantes, los defensores de los derechos humanos y la libertad de opinión y de expresión, le sirvieron para determinar los sectores de intervención que podían coordinarse con su mandato. En este mismo contexto, el Relator se entrevistó con los responsables de la asistencia al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y a los programas relativos a las poblaciones autóctonas.
5. Todas estas consultas han convencido al Relator Especial de que la problemática de la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia informa la mayoría de los programas y mecanismos de la Oficina del Alto Comisionado, si no todos ellos. Por lo demás, se están tomando disposiciones para que la Declaración y el Programa de Acción de Durban se plasmen concretamente en diversas actividades relativas tanto a las estrategias regionales como al funcionamiento de los órganos de seguimiento de los tratados -como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que ya ha adoptado recomendaciones generales a este respecto- o a los procedimientos antes indicados. Así pues, el Relator se propone inscribir su acción en esta dinámica consensual mediante el fortalecimiento de la coordinación y la cooperación con el Comité, el trabajo en equipo y la complementariedad con los otros relatores especiales, la concertación con la Oficina del Alto Comisionado, y en particular con su Dependencia de Lucha contra la Discriminación, y los diferentes mecanismos que participan en el seguimiento de la Conferencia contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Conferencia de Durban).

## **B. Participación en el Seminario Regional de Expertos para África, sobre la aplicación del Programa de Acción de Durban**

6. Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2002, el Relator Especial participó, a invitación del Alto Comisionado, en el Seminario Regional de Expertos para África, celebrado en Nairobi, sobre el tema "La aplicación del Programa de Acción de Durban: un intercambio de ideas sobre los medios para avanzar". El Relator intervino en el Seminario, refiriéndose a las medidas que deben preverse para combatir la discriminación contra los no nacionales, incluidos los migrantes y los refugiados. En particular el Relator propuso que, para subsanar el frecuente rechazo de los no nacionales por parte de la población del país anfitrión, las autoridades competentes de cada país promuevan el conocimiento recíproco de nacionales y no nacionales y la integración de las culturas, las civilizaciones y las tradiciones espirituales. Para ello deberá recurrirse en particular a la educación y la información, el reconocimiento del pluralismo y la promoción del diálogo intercultural. En último término, se trata de introducir en el tejido de la nación el valor de la unidad en la diversidad, o sea reconocer a la vez las especificidades y promover los valores compartidos que las trascienden.

7. Del Seminario se desprendió que los Estados africanos conceden una importancia primordial a la aplicación de los párrafos 157 y 158 del Programa de Acción de Durban, que parecen ofrecer la clave para acabar con el ciclo secular de la opresión, la explotación, la injusticia y la pobreza, y promover el buen gobierno. La Comisión debería prestar atención urgente a este punto esencial de las recomendaciones del Seminario de Nairobi, para garantizar un seguimiento eficaz de la Conferencia de Durban.

## **C. Participación en los trabajos del quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General**

8. Del 21 al 25 de octubre de 2002 el Relator Especial participó en el quincuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, y expuso a la Tercera Comisión su visión del mandato que se le ha confiado. El Relator subrayó que, según el espíritu de la Declaración y Programa de Acción de Durban, la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, exige el seguimiento y la confrontación, no sólo de las respuestas jurídicas y políticas, sino también de las bases, procesos y mecanismos ideológicos, culturales y mentales que perpetúan y renuevan el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, para proponer soluciones que ataquen las raíces mismas de estos flagelos.

9. Podría decirse, en efecto, que la mundialización se articula en torno a las siguientes manifestaciones: una uniformización cultural derivada de la lógica de un mercado global que ignora las identidades culturales y las especificidades nacionales, provocando, como reacción, una tendencia al repliegue en la propia identidad, el predominio de los valores materialistas del consumo y la competencia y la erosión de los valores culturales y espirituales. Este proceso nutre, desarrolla, renueva e incluso trivializa la discriminación. Es en el ámbito de la cultura donde se construyen, justifican y expresan en profundidad el desconocimiento y la imagen negativa del otro. El desprecio cultural, consecuencia del etnocentrismo, que esencialmente es una elaboración ideológica para justificar la discriminación y el dominio, constituye el fundamento más sólido, explícito o implícito, de la mentalidad y las prácticas de la discriminación, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. La crispación identitaria, que es un

reflejo defensivo contra la uniformización, exagera la tendencia a encerrarse en la nación, la comunidad, el grupo, la etnia, la religión y el modo de vivir: "nuestros valores" contra los de los demás. Los nuevos grandes conflictos de nuestro tiempo, que son los más radicales, violentos e irreductibles, constituyen esencialmente antagonismos culturales, cuya característica común es la emergencia de la figura del otro, que a menudo es el vecino de ayer, como amenaza, enemigo radical e irremediabilmente diferente, "extraño extranjero".

10. Esta pronunciada tendencia de la mundialización ha sido objeto incluso de una teorización, o sea de una elaboración intelectual de justificación y explicitación conceptual e histórica. La obra *El choque de civilizaciones*, de Samuel Huntington<sup>1</sup>, es un ejemplo reciente de ello. En este contexto, la realidad, la imaginación, las fantasías, las estrategias y las manipulaciones de control y de dominio se mezclan y falsean la percepción objetiva de los problemas, así como la elaboración de respuestas duraderas a la discriminación.

11. Así pues es necesario, de modo acorde con el espíritu de la Declaración y el Programa de Acción de Durban que sitúan la cuestión del racismo y la discriminación en un contexto más global, concebir un nuevo planteamiento en el que la reflexión sobre las raíces profundas, los mecanismos, los procesos, las expresiones y las modalidades del racismo y la discriminación racial esclarezca la acción. En otros términos, en la lucha para conseguir la democracia política, social y económica, la elaboración de instrumentos y mecanismos jurídicos debe asentarse en una estrategia intelectual que combata las raíces culturales de la discriminación, que determinan en profundidad las mentalidades y los comportamientos. Además, el Relator Especial considera que en el origen mismo de la cultura y los comportamientos discriminatorios se encuentran dos conceptos especialmente sensibles que nutren y estructuran la mayor parte de los conflictos culturales del presente: la instrumentalización de la diversidad y la exacerbación de la identidad.

12. En el pensamiento dominante, el concepto de diversidad parece constituir cada vez más la respuesta a los peligros de la uniformización cultural de la mundialización y de la exacerbación de la identidad cultural, religiosa, étnica y comunitaria. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico e histórico este concepto viene condicionado y ultradeterminado por su contexto y su esfera política, filosófica e ideológica. La diversidad no constituye de por sí un valor, en el sentido ético del término. En el plano filosófico, la noción de diversidad conlleva una fuerte connotación en el discurso filosófico y científico de los siglos XVIII y XIX. Los trabajos científicos y filosóficos sobre la diversidad de las especies y las razas han creado teorías de jerarquización que han servido no sólo de pedestal ideológico y filosófico para la elaboración de teorías de discriminación racial, étnica, social y religiosa, sino también de marco intelectual para justificar empresas de explotación y dominio, como la trata de esclavos o la colonización, mencionadas explícitamente en el documento final de la Conferencia de Durban.

Es precisamente esta instrumentalización de la diversidad lo que constituye la esencia del etnocentrismo. Todos los etnocentrismos se edifican histórica, ideológica y culturalmente sobre una lectura de la diversidad como diferencia radical, desigualdad y discriminación del otro. Así pues, conviene reconsiderar el concepto de identidad en el marco de una nueva estrategia, intelectual y ética, de lucha contra el racismo y la discriminación.

---

<sup>1</sup> Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 1997.



13. El Relator Especial ha observado que toda la historia de las relaciones entre los pueblos pone de manifiesto el carácter decisivo del equívoco identitario. La identidad, concepto ambivalente, puede ser a la vez afirmación de sí y negación del otro. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, y en particular la dialéctica movimiento/encuentro/interacción entre los pueblos que ha estructurado todas las civilizaciones y culturas, el Relator propone, para que la identidad no sea un obstáculo sino un factor favorable al diálogo, una nueva comprensión de la identidad (ética, cultural o espiritual) que no se conciba ya como un gueto o un encierro, sino que se comprenda, asuma y practique como un proceso, un encuentro, una síntesis dinámica. En un contexto de repliegue identitario en el que, como demuestran la mayor parte de los conflictos actuales, el enemigo de hoy es el vecino de ayer y resurgen viejas y nuevas formas de racismo, discriminación y xenofobia, se trata de hacer que se vea y se comprenda que la identidad es textura, trabazón, movimiento. La identidad expresa pues esta alquimia misteriosa por la cual, en la dialéctica del dar y el recibir, un pueblo, con su genio propio, mediante procesos complejos y a menudo aleatorios, recibe, transforma y hace suyas las influencias procedentes del exterior.

14. En último término, se trata de promover la idea de que la identidad puede ser la piedra angular de una ética, de un nuevo descubrimiento de la proximidad del otro y, por ende, del diálogo.

15. En este contexto, una estrategia duradera de desarraigo de la cultura y la ideología de la discriminación podría inspirarse en la lección fundamental de la biodiversidad, según la cual la existencia y la interacción de especies diferentes es fuente y condición de vida, y la desaparición de una especie es mortal para el conjunto del ecosistema. La trasposición al "vivir juntos" de esta lección de la biodiversidad debe plasmarse en una nueva visión social basada en la dialéctica de la unidad y la diversidad, así como en la comprensión y la promoción del valor de la fecundación recíproca de las culturas, los pueblos, las etnias y las religiones, como condición esencial no ya de la vitalidad, sino incluso de la supervivencia de cualquier sociedad. De este modo, el diálogo de las culturas y las civilizaciones será la expresión de una especie de "biocultura".

16. La eliminación de la discriminación tiene como correlato la transformación de la biodiversidad, concepto que histórica e ideológicamente se materializa en un valor que, preservando su esencia plural, vincula dialécticamente la unidad y la diversidad. Este valor es el pluralismo.

17. El pluralismo étnico, cultural, social y espiritual constituye un valor fundamental para el combate contra todas las formas de discriminación en el contexto, entre otros, de la mundialización. El pluralismo podría definirse como el reconocimiento, la protección y el respeto de la diversidad. En su sentido más profundo, el pluralismo expresa el reconocimiento y la protección de las especificidades étnicas, culturales y espirituales y, al mismo tiempo, la aceptación de valores que, en una sociedad determinada, trascienden estas especificidades. En este sentido el pluralismo es el valor operativo de la dialéctica unidad/diversidad, que es el pedestal más sólido para el equilibrio y la armonía de una sociedad multicultural. De esta manera la promoción del pluralismo podría constituir el valor central en torno al cual se edifique una estrategia de erradicación de la discriminación en todas sus formas. Una estrategia global implica que el pluralismo, que el Relator Especial quiere definir como reconocimiento, promoción y respeto de la diversidad, sea objeto de medidas concretas, elaboradas democráticamente, en las esferas del derecho, la educación, la información y la comunicación, y

que se proyecten al terreno social en el que se expresa la discriminación (empleo, vivienda, salud).

18. En esta nueva estrategia, los instrumentos intelectuales de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación podrían estructurarse en torno a la historia, la educación y los intercambios económicos:

- La historia es el teatro o escenario en el que las culturas, las civilizaciones y los pueblos han construido su identidad y sus relaciones con el otro. Es a este terreno -en el que han surgido todos los equívocos y antagonismos, las amistades y las enemistades- al que hay que prestar atención primordial en la perspectiva del diálogo entre las culturas y las civilizaciones. El terreno de la memoria -y de la larga memoria de la historia- permite remontarse al origen de los procesos, los mecanismos y las expresiones del diálogo o del conflicto. Se trata pues de una revisión de urgencia, por cada pueblo y por todos los pueblos juntos, de la escritura, el contenido y la enseñanza de la historia como factor fundamental del diálogo.
- La educación y la enseñanza constituyen, a la larga, las vías caudales de la transformación de los espíritus: allí es donde se edifica el saber, los conocimientos y los valores. Allí también se trasmite y se enraíza la imagen y la percepción del otro, y, en consecuencia, es allí donde debe inscribirse en profundidad la ética del pluralismo y el diálogo. En efecto, la educación intercultural es una catarsis que obliga a cada pueblo y a cada cultura a contemplarse críticamente, a poner en tela de juicio las certidumbres y a romper todas las vallas y cercados. En cuanto a la comunicación, que permite construir y transmitir la imagen propia y del otro, también ha de ser intercultural para expresar de modo concreto la necesidad del intercambio y del diálogo, en el sentido de la hermosa fórmula de Sean Mac Bride, "un solo mundo, voces múltiples".
- Los intercambios económicos son otro instrumento privilegiado de diálogo. El comercio ha sido, desde siempre y en todos los continentes, un vector de encuentro, difusión e interacción cultural, artística y espiritual. Se trata pues de dejar atrás las teorías seductoras pero falsas del antagonismo entre la cultura y el comercio, y de inscribir el valor del diálogo en los pliegues profundos del intercambio, que constituye la base del comercio. En este contexto es urgente subrayar la insidiosa aparición de un nuevo discurso de discriminación basado en las teorías, explícitas o implícitas, que atribuyen el subdesarrollo a la existencia y el peso, en las sociedades afectadas, de valores y mentalidades arcaicas y atrasadas, contrarias a la "modernidad".

Así pues, el desarrollo y el crecimiento no deberían seguir respondiendo a una lógica o modelo de mercado determinados, sino permitir la polifonía de los modos de ser y de vivir. En último término, la esencia del diálogo entre las culturas y las civilizaciones debería ser un factor ineludible de negociación sobre el comercio y la economía mundial. De este modo la ética cultural estaría en condiciones de atenuar las dimensiones negativas de la ley del mercado.

En el marco de esta estrategia, deberá prestarse atención especial a aquellas esferas que encierran grandes posibilidades de encuentro e interacción que puedan

nutrir o obstaculizar el racismo, la discriminación y la xenofobia y favorecer el diálogo entre las culturas, como el turismo, la inmigración y el deporte.

19. En consecuencia, el Relator Especial propone las prioridades siguientes:

- La aplicación vigilante e íntegra, del documento final de la Conferencia de Durban (Declaración y Programa de Acción), que servirá de guía y de referencia para la elección de las regiones y los países que han de ser objeto de investigaciones y estudios, con miras a la preparación del informe anual a la Comisión y a la Asamblea General.
- El vínculo entre la lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia y la promoción del diálogo entre civilizaciones, culturas y religiones.
- Una investigación a fondo sobre la cuestión, persistente e inquietante, del racismo en el deporte, en estrecha cooperación con las instancias competentes como el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
- El envío de misiones con carácter prioritario a los países y las regiones donde la gravedad de la situación y de las prácticas discriminatorias imponen una acción de urgencia.
- El informe sobre la situación de los musulmanes y los árabes en diversas partes del mundo después del 11 de septiembre de 2001, presentado de conformidad con la resolución 2002/9 de la Comisión (E/CN.4/2003/23).

20. Al margen del período de sesiones de la Asamblea General, el Relator Especial celebró consultas con representantes de Estados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. En Washington se entrevistó con miembros de la Organización de los Estados Americanos a fin de mejorar la cooperación con esta Organización con miras al seguimiento de la Conferencia de Durban, y contribuir en particular a su proyecto de elaboración de una convención interamericana contra la discriminación racial, especialmente significativo en una región en la que se desarrollan procesos complejos y profundos de multiculturalismo. En sus contactos con las organizaciones de defensa de los derechos humanos el Relator, con el apoyo especialmente eficaz del Grupo Jurídico Internacional de Derechos Humanos, sostuvo un amplio intercambio de impresiones, informaciones y sugerencias sobre el cumplimiento de su mandato y el seguimiento de la Conferencia de Durban.

#### **D. Participación en la Conferencia Mundial de Africanos y Descendientes de Africanos contra el Racismo**

21. El 2 de septiembre de 2002, el Relator Especial recibió una invitación del Comité Organizador Central de la Secretaría de la Conferencia Mundial de Africanos y Descendientes de Africanos contra el Racismo para participar en la conferencia de seguimiento a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se iba a celebrar del 2 al 6 de octubre de 2002 en Bridgetown. Según sus organizadores, la finalidad de la Conferencia Mundial de Africanos y Descendientes de

Africanos contra el Racismo era elaborar estrategias para la aplicación del Plan de Acción de Durban, intercambiar información sobre programas y proyectos eficaces y constituir una organización no gubernamental mundial panafricana en cuyo seno pudiera continuar colaborando la diáspora africana.

22. En la inauguración de la Conferencia, el Relator Especial se sintió consternado al observar que la moción presentada por un grupo de ONG solicitaba la exclusión de algunos participantes, debidamente invitados e inscritos, conforme a criterios racistas manifiestos. En la sesión plenaria, el Relator Especial fue el primero en expresar su firme oposición a la moción que, en su opinión, vulneraba el principio fundamental de las Naciones Unidas de no discriminación por motivos de raza, nacionalidad u origen étnico, con lo que traicionaba el propósito y espíritu propios de la Conferencia Mundial contra el Racismo a la que esa reunión debía dar seguimiento. El Relator Especial manifestó formalmente su intención de abandonar la Conferencia si se aprobaba la moción. Los participantes en la Conferencia votaron la moción, que resultó aprobada; en consecuencia, se expulsó de la sesión plenaria a participantes: intérpretes, periodistas y delegados de ONG. Por lo tanto, las delegaciones nacionales compuestas por diferentes razas sufrieron una división según criterios raciales.

23. Por consiguiente, el 3 de octubre de 2002, el Gobierno de Barbados que, en consonancia con su papel activo en la Conferencia de Durban, como quedó demostrado por los servicios brindados para la organización de la Conferencia y por su política de promoción de una sociedad multirracial, emitió un comunicado de prensa en el que condenaba firmemente la decisión adoptada en la Conferencia. El Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el Relator Especial abandonaron la Conferencia y retiraron el apoyo que le habían expresado anteriormente mediante una nota especial remitida a la Presidencia del Comité Organizador Central de la Conferencia el 4 de octubre de 2002.

#### **E. Participación en la semana brasileña de la conciencia negra**

24. El 21 de noviembre de 2002, por invitación del Gobierno brasileño, el Relator Especial participó en Brasilia en la inauguración del Centro Nacional de Información y de Referencia sobre la Cultura Afrobrasileña junto con el Presidente Fernando Enrique Cardoso y el Presidente del Banco Mundial, Sr. John Wolfensohn, que se encontraba de visita en el Brasil. El Relator considera que esta invitación es un mensaje simbólico notable de un país resuelto a afrontar y a resolver de manera radical y sostenible los problemas de un patrimonio histórico profundamente marcado por la discriminación racial, pilar del sistema de esclavitud. Los representantes de la comunidad afrobrasileña, en especial los de la Fundación Palmares, con quienes también se reunió el Relator, ratificaron esta evaluación. En efecto, el Brasil puso en marcha un amplio programa de acción afirmativa o de medidas correctivas en favor de sus poblaciones de ascendencia africana, en particular en el ámbito de la educación y del acceso a la función pública, especialmente a la carrera diplomática. En varias leyes y decretos federales aprobados recientemente (entre los que cabe destacar la Ley N° 10558 de 13 de noviembre de 2002 y el Decreto N° 484 de 22 de agosto de 2002 del Ministerio de Cultura) se establecen cuotas del 20% de plazas reservadas a los afrobrasileños en las universidades y en la función pública. Asimismo el Gobierno tiene la intención de intervenir en las empresas públicas mediante la adjudicación con carácter preferencial de contratos a las empresas que procuran poner en práctica esta política de medidas correctivas. Todavía queda mucho por hacer, y el Relator Especial tiene la intención de seguir con atención y de fomentar estos esfuerzos.

## **F. Participación en el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana**

25. El Relator Especial fue invitado a participar del 25 al 29 de noviembre de 2002 en el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana. Explicó al Grupo la importante y compleja cuestión de la reparación para las poblaciones de ascendencia africana. El Relator señaló que no se debía descartar el principio de reparación debido a los numerosos precedentes existentes, como, por ejemplo, la reparación otorgada por los esclavistas tras la abolición de la esclavitud, las sanciones financieras impuestas por Francia a Haití durante muchos años y las indemnizaciones concedidas al pueblo judío tras la segunda guerra mundial. No obstante, consideró que se debía dar prioridad a la reparación moral. En este sentido, la Conferencia de Durban supone la culminación de una primera etapa al reconocer que la esclavitud y la trata de esclavos constituyen crímenes de lesa humanidad. La segunda reparación es de índole histórica y tiene por objeto la publicidad de los archivos y el acceso a los mismos con miras a estudiar, dar a conocer y enseñar, de manera universal, la historia completa de las causas profundas y de las condiciones materiales y humanas de lo que el historiador francés Jean-Michel Deveau calificó como "la mayor tragedia de la historia de la humanidad por su duración y amplitud". Entonces será posible demostrar la relación directa entre la esclavitud y el subdesarrollo de África, el Caribe y Sudamérica (por su impacto demográfico en varios millones de personas y por la profunda desestabilización, durante cuatro siglos, del sistema productivo del continente africano) y vincular este dato primordial a las negociaciones sobre el desarrollo y en concreto a la cuestión de la deuda. Finalmente, la tercera será una reparación de la memoria histórica mediante la identificación, la restauración y la promoción de todos los lugares recordatorios de la trata de esclavos y de la esclavitud (fuerzas, castillos, buques, cementerios, mercados de esclavos) y el patrimonio intangible (todos los sistemas ideados por las personas esclavizadas para resistir y sobrevivir).

26. Este triple enfoque debería posibilitar la determinación de la responsabilidad de todos los que concibieron, animaron y aprovecharon el sistema de esclavitud, en Europa y en las Américas y el Caribe, así como de los sistemas feudales que fueron sus cómplices y tomaron su relevo en África.

27. Asimismo el Relator Especial se pronunció sobre la definición del concepto de personas de ascendencia africana y consideró que debía incluir a todos los miembros de la diáspora africana presente tanto en las Américas como en Europa y Asia.

## **II. MANIFESTACIONES CONTEMPORÁNEAS DEL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA**

### **A. Racismo, discriminación racial, xenofobia en política**

#### **1. Situación en Côte d'Ivoire**

28. Desde el 19 de octubre de 2002, Côte d'Ivoire sufre un conflicto complejo que, según la información recibida por el Relator Especial, se ha intensificado con la exacerbación de las tensiones interétnicas y de las manifestaciones xenófobas.

29. Se ha informado de que determinados sectores de la población de Côte d'Ivoire han incitado al odio étnico, a la opresión de las poblaciones del norte y a la xenofobia contra los extranjeros. El 24 de octubre de 2002, el Relator Especial, junto con el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, publicó un comunicado sobre la situación en Côte d'Ivoire y exhortó a las autoridades de este país a intensificar la vigilancia contra los riesgos de conflictos étnicos y a tomar con urgencia las medidas necesarias para poner fin a los actos inspirados por ideas o teorías basadas en la superioridad de un grupo de personas, de un determinado color o de un determinado origen étnico. Desde entonces, diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, en África (por ejemplo Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme [RADDHO]) y en el resto del mundo (por ejemplo Human Rights Watch) han documentado tras una investigación masacres y asesinatos que, por su número y el origen étnico o comunitario de sus víctimas, requieren una intervención urgente de la comunidad internacional.

30. El 2 de diciembre de 2002, el Relator Especial escribió a las autoridades de Côte d'Ivoire para solicitar una visita *in situ* con vistas a determinar, en el marco de su mandato, la situación real en materia de discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia y a informar de ello a la comunidad internacional.

## **2. Situación en Guyana**

31. El Relator Especial recibió información de diversas fuentes sobre el deterioro de la situación política de Guyana tras las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en marzo de 2001. El Partido Progresista Popular/Cívico (PPP/C) ganó esas elecciones y su dirigente, el Sr. Bharrat Jagdeo, fue elegido Presidente de Guyana para un tercer mandato de cinco años. La agitación social y la violencia ocasional empañaron el período posterior a las elecciones; además, el principal partido de la oposición, el Congreso Nacional Popular/Reforma (PNC/R), liderado por el Sr. Desmond Hoyte, sostuvo que los procedimientos electorales habían vulnerado la Constitución. De hecho, desde su independencia el clima político de Guyana se ha caracterizado por el legado dejado por la esclavitud y la colonización de tensiones entre los dos grupos étnicos principales, la población indoguyanesa (aproximadamente el 49%) y la población afroguyanesa (aproximadamente el 35%) del país, que cuenta con 700.000 habitantes. Ambos partidos políticos se encuentran profundamente divididos en función de criterios étnicos: la población indoguyanesa respalda principalmente al PPP/C, mientras que la población afroguyanesa apoya sobre todo al PNC/R.

32. La situación actual de Guyana tiene su origen en el pasado colonial del país. En efecto, parece que las diversas comunidades que poblaron Guyana a raíz de la transferencia forzosa de mano de obra africana e india realizada bajo el Imperio Británico todavía no han logrado superar de manera pacífica sus rivalidades por el control del poder y la gestión equitativa de los recursos del país. El Relator Especial se siente muy preocupado por el riesgo de empeoramiento del conflicto interétnico en Guyana y ha comunicado sus temores a las autoridades de este país, así como su deseo de visitar la zona. Además, ha remitido una comunicación al Gobierno de Guyana en la que expone las denuncias que ha recibido.

## **B. Discriminación racial contra los romaníes/sintis/gitanos/nómadas**

33. El pueblo romaní sufre la discriminación racial en casi todos los ámbitos de la vida pública, educación, empleo, vivienda, acceso a los lugares públicos y ciudadanía. En algunas zonas de residencia, los romaníes son víctimas de la brutalidad de la policía y sufren discriminación en los procesos judiciales. La estigmatización del pueblo romaní en varias sociedades menoscaba sus posibilidades de gozar de sus derechos fundamentales como ciudadanos en pie de igualdad. La falta de tolerancia de su cultura y costumbres entraña su marginación en la sociedad.

34. En Europa, se informa de que sistemáticamente se niega el acceso de personas romaníes a los restaurantes, discotecas, estadios y otros lugares públicos. El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes ha informado de que los romaníes son objeto de discriminación en el sistema judicial y en particular de que los actos de agresión contra ellos no son objeto de sanciones adecuadas en algunos países. Además, muchos informes relativos a la situación de los romaníes indican que tienen más probabilidades de que se les impongan penas severas por los delitos cometidos, de que se les retenga más tiempo en prisión preventiva y de tener dificultades para ejercer su derecho a la asistencia jurídica. Diversos grupos de defensa de los derechos humanos también han comprobado que los romaníes suelen ser objeto de discriminación en los centros de enseñanza y que en materia de vivienda a menudo son víctimas de desalojo forzoso y de segregación residencial.

35. El 1º de octubre de 2002, el Consejo de Europa presentó su informe sobre el Foro Romaní Europeo, en que figuraban diversas recomendaciones del Grupo Exploratorio oficioso dedicado al estudio de la creación de un órgano paneuropeo de asesoramiento en asuntos romaníes. En esta iniciativa, se consideran distintas posibilidades para lograr una participación adecuada de los romaníes en la adopción de las decisiones que les afectan, mediante la creación de una especie de asamblea consultiva en que estén representados a escala paneuropea. En el informe se examinan su tamaño y composición y los procedimientos de selección de un Foro Romaní Europeo y los vínculos institucionales entre este Foro y el Consejo de Europa, así como diversos ámbitos de cooperación con organizaciones internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones Unidas.

36. A escala internacional, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité de Derechos Humanos y otros órganos de tratados se han ocupado de la discriminación de los romaníes en diversas observaciones finales sobre los informes de los Estados Partes<sup>2</sup>. Además, en su 57º período de sesiones, el CERD adoptó la Recomendación general Nº XXVI, de 16 de agosto de 2000, que trata específicamente de la discriminación de los romaníes. En dicha recomendación, el CERD enumera un conjunto de medidas que pueden adoptar los Estados para combatir la discriminación de los romaníes y garantizar su protección. En concreto, el CERD propone medidas: contra la violencia racial, para mejorar las condiciones de vida, en el ámbito de los medios de comunicación, sobre la participación en la vida pública.

---

<sup>2</sup> Véase por ejemplo Comité de Derechos Humanos: Observaciones finales: República Checa, 2001 (CCPR/CO/72/CZE); Hungría, 2002 (CCPR/CO/74/HUN); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones finales: Croacia, 2001 (E/C.12/1/Add. 73).

Asimismo el CERD pide a los Estados Partes que incorporen en sus informes periódicos información sobre las comunidades romaníes que estén dentro de su jurisdicción.

37. El Relator Especial valora altamente la enorme preocupación actual por la situación de las poblaciones romaníes en muchos países europeos, que su mandato ha contribuido a poner de relieve. La importante evolución que se está dando a escala regional en el sentido de aumentar la participación de los romaníes en los procesos de decisión y las recomendaciones emitidas a escala internacional sobre la salvaguardia de sus derechos son una tendencia positiva que el Relator Especial se propone respaldar. El Relator, por lo tanto, seguirá pendiente de la situación de los romaníes e informará a la Comisión de Derechos Humanos.

### C. Antisemitismo

38. El Relator Especial recibió del Gobierno de Israel, así como de varias ONG judías, denuncias de la difusión en gran escala en el Oriente Medio y en Europa de los *Protocolos de los Sabios de Sion*. Según las denuncias, este libro manifiestamente antisemita es una falsificación realizada a principios del siglo XX para informar de una conspiración, tramada por judíos durante un congreso sionista, destinada a subvertir la cristiandad mediante el sabotaje y a dominar el mundo. Según se afirma, este documento apareció por primera vez en 1905 en Rusia y se distribuyó ampliamente fuera de este país durante el siglo XX, lo que alimentó el antisemitismo. En un país del Oriente Medio, una cadena privada de televisión produjo y difundió los *Protocolos de los Sabios de Sion* en una serie de 41 episodios. El Relator Especial se dirigió a las autoridades de los países a los que atañe esta propaganda antisemita.

## III. DENUNCIAS TRATADAS POR EL RELATOR ESPECIAL

39. Durante el año 2002, el Relator Especial examinó varias denuncias relacionadas con su mandato sobre los siguientes países: Alemania, España, la Federación de Rusia, Grecia, Guyana y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los resúmenes de estas denuncias y las respuestas recibidas de los gobiernos de los países interesados figuran en el anexo del presente informe en el idioma en que se presentaron.

## IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

40. **En conclusión, el Relator Especial subraya que sus primeros contactos con representantes de los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pusieron de relieve la urgencia de aplicar la Declaración y Programa de Acción de Durban con miras a atajar el recrudecimiento alarmante de las manifestaciones de racismo ordinario y la aparición de nuevas formas insidiosas de discriminación y racismo. Asimismo el Relator Especial subraya, en este contexto, el recrudecimiento especialmente inquietante de situaciones que, por confusión intencionada o amalgama entre raza, religión y cultura, imponen respuestas urgentes y radicales. En consecuencia, el Relator Especial propone, a la luz de la Declaración y Programa de Acción de Durban, una doble estrategia: jurídica y política (para la ratificación y aplicación de todos los instrumentos y acuerdos internacionales pertinentes), intelectual y ética (para un mejor conocimiento y comprensión de las raíces profundas, de los procesos y mecanismos de la**



**cultura y de la mentalidad de la discriminación). El objetivo consiste, mediante la reflexión y la acción, en vincular estrechamente la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia con la promoción urgente del diálogo entre las culturas, civilizaciones y religiones. A estos efectos, se proponen las siguientes recomendaciones a la Comisión:**

- **Promover la complementariedad y la cooperación entre todos los mecanismos de lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia, en particular los relativos a la aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban, así como entre el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial, y entre los relatores especiales;**
- **Prestar más atención a las situaciones y prácticas de discriminación de los no nacionales, de los migrantes y de los refugiados;**
- **En las deliberaciones de la Comisión, conceder más importancia a las causas profundas, intelectuales y étnicas de la cultura y de la mentalidad del racismo y de la discriminación;**
- **Otorgar un lugar preponderante al diálogo de las civilizaciones, de las culturas y de las religiones, como mayéutica de superación de todas las formas de discriminación, de rechazo y de intolerancia;**
- **Privilegiar la educación en todas sus dimensiones (enseñanza en particular de la historia, de la ética, de los derechos humanos como ética universal, de las culturas, de los valores comunes de todas las religiones y tradiciones espirituales) y la información y la comunicación interculturales;**
- **Promover el valor fecundo del pluralismo, entendido como el reconocimiento, la aceptación, el respeto y la promoción de la diversidad. Promover en este contexto el concepto de identidad, concepto ambivalente que puede constituir la afirmación legítima de la especificidad pero también la negación del prójimo.**

## ANNEXE

### ALLÉGATIONS TRAITÉES PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL ET REPONSES DES GOUVERNEMENTS

#### A. Allemagne

1. Joint communication of 12 September 2002, sent together with the Special Rapporteur on Torture and the Special Rapporteur on the Human Rights of migrants.

1. **Denis Mwakapi**, a 33-year-old man originally from Kenya, and his white German wife, Ursula Mwakapi, were reportedly en route to a bar in Nuremberg's city centre in the course of a pre-Christmas celebration on 23 December 2000 at around 2 a.m., when they were approached by two American men and their two female companions, who believed that the black African was in some way harassing a white German woman. Denis Mwakapi had reportedly been talking loudly in an animated fashion but not in a manner which could have been construed as being aggressive. The two American men are said to have begun punching and hitting Denis Mwakapi before his wife could explain to them that he was her husband. After Ursula Mwakapi was able to separate the men from her husband and explain their relationship to them, the American men were said to have apologised. Denis Mwakapi reportedly accepted their apologies, even though he is said to have sustained a swollen upper-lip during the assault. Three police vehicles reportedly arrived at the scene on *Luitpold Straße* very shortly after the two groups of people had begun to disperse. Two police officers are said to have approached the American men and allowed them to leave after checking their identification. They then reportedly approached Denis Mwakapi and his wife, paying little attention to Denis Mwakapi's complaint that the fight had ensued after he had been assaulted by the two American men, reportedly causing him great indignation. His wife also reportedly attempted to inform the police officers of the background to the incident. The police officers are said to have arrested Denis Mwakapi after he became agitated and refused to calm down. One of the police officers (whose name is known to the Special Rapporteurs) is alleged to have taken hold of Denis Mwakapi's right arm and forcefully twisted it behind his back in order to effect the arrest, fracturing Denis Mwakapi's lower right arm in the process. The police officers are alleged to have subsequently handcuffed Denis Mwakapi and placed him in a police vehicle in spite of the detainee's repeated requests for a doctor and cries of pain. Denis Mwakapi was then reportedly driven to *Nürnberg Mitte* police station, where Denis and Ursula Mwakapi's renewed requests that Denis Mwakapi be medically examined were allegedly refused. Police officers placed him in an overnight holding cell where he was held until his release at around 10.30 am on 23 December 2000. A medical examination conducted on 23 December 2000 at the in Nuremberg is said to have revealed that he suffered a fractured arm which required immediate medical attention. (...) As a result of his treatment by the police, Denis Mwakapi reportedly lodged with the Public Prosecutor's Office criminal complaints of physical assault and denial of assistance against the police officers. The office of the Public Prosecutor is said to have informed Denis Mwakapi's former lawyer on 4 July 2001, that it had terminated proceedings against the two police officers. A subsequent attempt by Denis Mwakapi's lawyer to have the investigation reopened also reportedly failed. The injury to Denis Mwakapi's arm has reportedly wielded longer-term effects on his ability to resume work. A report of a medical examination conducted by a Nuremberg doctor in February 2002, reportedly stated the healing of the arm has been a very drawn-out process and that Denis Mwakapi

continued to experience pain when exerting pressure or applying weight to it. (...) The injury has reportedly greatly affected Denis Mwakapi's ability to undertake certain types of employment.

2. **Doviedo Adekou**, a 59-year-old Togolese asylum-seeker was allegedly ill-treated in the town of Mettmann, North Rhine-Westphalia on 1 October 2001. During the incident, he reportedly sustained a serious injury to his right eye, which resulted in his hospitalization. He was reportedly ill-treated on the morning of 1 October 2001 as police officers attempted to detain him for the purposes of placing him in pre-deportation detention. Doviedo Adekou, who had applied for refugee status in Germany, had an appointment at the Office for Foreigners in Mettmann with one of its employees in order to discuss whether his temporary right to remain in the country would be extended. In the course of the meeting, the employee reportedly informed him that he would be deported on 12 October 2001. Doviedo Adekou reportedly requested that he receive the formal decision in writing, be allowed to consult his legal advisor (*Rechtsbeistand*) and to prepare for his departure. A second male police official reportedly then entered the room and placed a handcuff around Doviedo Adekou's left hand and informed him that he was being taken into custody. The police officer reportedly attempted to handcuff Doviedo Adekou's other hand but had to call two more police officers into the room when his attempts failed. The three police officers allegedly grabbed hold of Doviedo Adekou's arms and pulled him face-down onto the floor of the office. While he lay on the floor of the office, one of the police officers is said to have deliberately punched him in the region of his right-eye, causing it to bleed heavily. The police officers reportedly subsequently gave up their attempts to handcuff Doviedo Adekou. A senior official at the Office for Foreigners reportedly entered the office and instructed a colleague to call an ambulance, which took Doviedo Adekou to Wuppertal clinic where he was said to have been treated as an in-patient at the clinic for nine days until 9 October 2001. According to a report outlining the medical treatment which Doviedo Adekou underwent at the clinic, written by the eye specialist of the clinic, dated 11 October 2001, Doviedo Adekou was treated for a rupture to the covering of the eye which had caused bleeding in the vitreous humour of the eye. The doctor reportedly stated in the report: "[w]ith such an extremely complicated injury an end to the treatment is at the present time not yet foreseeable". Approximately one week before the incident, Doviedo Adekou underwent an operation on his right eye. However, since suffering the blow to his eye on 1 October 2001, he has reportedly lost all sight in his right eye. Concerns have been expressed that whilst Doviedo Adekou was taken into custody for the purposes of his subsequent deportation, one of the involved police officers may have ill-treated him, by punching him in the region of his right eye. A complaint of serious criminal assault was said to have been lodged with Mettmann's District Police Authority.

3. **Svetlana Lauer**, who is originally from the former Soviet Union, was reportedly ill-treated by several police officers at her home in Hallstadt, located outside of the city of Bamberg, in the afternoon of 20 February 2002. Four police officers were said to have arrived at her apartment at around 3.30 p.m. with a verbal warrant issued by the State Prosecutor's Office to search the apartment for the purpose of securing evidence against her then 17-year-old daughter, Anastasia Lauer. Anastasia Lauer was alleged to have stolen a number of small porcelain figurines from the *REWE-Markt* department store in Hallstadt earlier in the afternoon and was arrested by the police on suspicion of shoplifting. The four police officers reportedly forced their way into her home after she had refused them entry on account of their failure to produce a written search warrant. She is said to have actively resisted their entry by obstructing their path with her body

and arms because she felt that they had no right to enter her home without written permission. While forcing their way into her apartment, the only female police officer among the four officials reportedly grabbed hold of her by the back of the neck and hit her head against an adjacent wall. A second male police officer allegedly grabbed hold of her arm and twisted it behind her back. With his other arm he was alleged to have grabbed hold of her hair and repeatedly hit her head against various doors and walls while leading her through the hallway of the apartment. The two remaining police officers were then said to have aided their colleagues in restraining her and handcuffing her arms behind her back. (...) After Svetlana Lauer spit at the female police officer several times, a second police officer allegedly came to the female police officer's assistance and began hitting Svetlana Lauer. The two police officers were also alleged to have twisted Svetlana Lauer's head back and forth and violently pulled on her handcuffed hands. The upper part of her house-coat was reportedly torn away from her in the process, leaving her in a semi-naked state with her upper-body covered only by her bra. The police officers were then reported to have searched Anastasia Lauer's room for the purpose of finding stolen items but were unable to find any evidence. When the police officers decided to leave, they are said to have led her out of the apartment block with her arms restrained behind her back, although by this time the handcuffs had been removed. On the way out of the apartment, Svetlana Lauer reportedly scratched the female police officer in the face after one of her arms became free. The female police officer and a bearded police officer allegedly grabbed hold of her and hit her head against a wall of the apartment. In retaliation, Svetlana Lauer reportedly scratched a male police officer in the face. All four police officers are said to have restrained Svetlana Lauer and to have handcuffed her arms behind her back. The one of the male police officer allegedly grabbed hold of her handcuffed hands and dragged her through the hallway of the apartment into a room. He is then alleged to have kicked her and to have hit her head against the floor. The same police officer was then alleged to have placed his foot on her back and continued to hit her as she lay on the floor. After her alleged ill-treatment, the police officers were said to have taken her to the police vehicle parked outside her home in full view of her two children and neighbours in the semi-naked state and without any footwear. The female police officer and her bearded colleague are said to have driven the detainee to Hallstadt police station, where she was later charged with resisting arrest and physically assaulting the police officers. (...) According to a medical report issued on 26 February 2002, Svetlana Lauer's injuries included multiple bruising and grazing to the head, both shoulders, right thorax, back, bottom, arms and legs. (...)

## 2. Response from the Government of Germany

4. By letter dated 14 November 2002, the Government of Germany transmitted the following information:

5. **Denis Mwakapi** was taken to Nuremberg Central Police station for clarification of the above-mentioned incident because he was reportedly unwilling to clear up the facts on the spot. Physical coercion was needed during his transfer since he put up resistance to it and behaved aggressively. He was placed in preventive detention after his wife expressed fears that she could not cope with him, in particular due to his drunkenness. When he later complained of pain in his arm some hours later, the concerned police officers did not believe him, based upon the fact that there were no visible signs of injury and that Denis Mwakapi repeatedly expressed his desire to continue celebrating in the city centre. The investigations carried out by the Public Prosecution Office against the two police officers accused of causing bodily harm, failure to lend

assistance and prosecution of innocent persons did not result in facts sufficient to constitute an offense. The behavior of the accused police officers was considered under these circumstances correct, necessary and proportionate. It is not clear whether the spiral fracture of his right forearm that he sustained is the result of the police officers' coercion or of the fight he previously sustained with the Americans. The Nuremberg-Fürth Public Prosecution Office terminated the investigation proceedings. The appeal against the termination order brought by Denis Mwakapi was not granted by the administrative decision of the Regional Prosecution Office attached to Nuremberg Higher Regional Court. After further investigations were conducted upon application of Denis Mwakapi, the Nuremberg-Fürth Public Prosecution Office terminated again the investigation proceedings and the Regional Prosecution Office attached to Nuremberg Higher Regional Court rejected the appeal against the most recent termination. Finally, his application for a judicial decision in the proceedings to force the Public Prosecution Office to prefer criminal charges was rejected as unfounded in a Ruling by the Criminal Division of Nuremberg Higher Regional Court dated 27 May 2002.

6. In relation to the case of **Doviedo Adekou**, the Government informed that in the light of the upcoming deportation date and because of the suspicion, based on him having abandoned his living quarters, that he would seek to avoid his deportation, the Mettman District Enforcement Officers decided to place him in custody and bring him before a magistrate to examine an arrest warrant for ensuring his deportation. A struggle started between him and officers of the District Administration at the moment of his arrest on 1 October 2002. As a result the enforcement officers sustained injuries and Doviedo Adekou was seriously wounded on his right eye, which could not be saved. The deportation scheduled for 12 October 2001 was cancelled. An investigation was initiated following Doviedo Adekou's complaint filed on 24 January 2002 at the District of Mettmen Police Authority and based on coercion and serious bodily harm during the performance of official duties. A date for the completion of the investigation could not be foreseen at the time the Government submitted its response. The Government has also informed that after this incident, it has been decided by the District Administration that arrests would only be carried out in consultation with police officers and that the enforcement officers would also be trained more thoroughly in the area of arrest techniques.

7. In connection with the case of **Sveltana Lauer**, the Bamberg Public Prosecution Office launched an investigation against the police officers involved in the incident after she filed a criminal complaint on 22 February 2002. According to the results of this investigation, which is not yet completed, she was not abused, insulted, hit, kicked, or otherwise by word or act humiliated, the officers did not intentionally hit her head against the wall nor pull her hair. She was not pulled by the handcuffs from the hallway into the room that had been searched. Instead, it is reported that Sveltana Lauer behaved very aggressively and that it cannot be ruled out that she hit her head or other body parts against the wall during the physical fight that took place between her and the female police when the latter attempted to restrain Sveltana Lauer. According to a medical examination carried out on 28 February 2002, it could not be conclusively determined, from a forensic medical point of view, whether the documented injuries were the result of mistreatment by the police officers. On the other hand, an investigation proceeding in relation to these facts is pending against Sveltana Lauer based upon obstructing enforcement officers in the execution of their official duties, defamation, and bodily harm.

3. Observations of the Special Rapporteur

8. The Special Rapporteur appreciates the prompt and detailed response that Government of Germany provided in regards to the three allegations presented. In the case of Doviado Adekou, the Special Rapporteur welcomes the information stating that after the incident the District Administration adopted measures to improve the conditions under which arrests are carried out, including appropriate training on arrest techniques. The Special Rapporteur takes the opportunity to recommend that such efforts be accompanied by additional measures aimed at ensuring that “police and immigration authorities treat migrants in a dignified and non-discriminatory manner, in accordance with international standards, through, *inter alia*, organizing specialized training courses for administrators, police officers, immigration officials and other interested groups”, in accordance with the Program of Action of the World Conference Against Racism (Article 30 (e)). The Special Rapporteur would appreciate receiving the final conclusions of the investigations currently underway both in the case of Doviado Adekou and Sveltana Lauer.

**B. Espagne**

Communication conjointes transmises le 4 septembre 2002 avec les rapporteur spéciaux sur la torture et les droits des migrants

9. Les rapporteurs spéciaux ont reçu des informations au sujet des cas suivants:

10. **Boaventura Simão Vaz**, ressortissant de la Guinée-Bissau et mécanicien de son métier, aurait été arrêté le 1<sup>er</sup> mars 2001 alors qu’il était attablé en compagnie de deux autres personnes dans un bar, à Madrid. Selon les informations communiquées, un agent de la Police nationale en civil lui a demandé ses papiers. Il a ensuite été poussé à l’extérieur, menotté puis conduit dans un commissariat, où il a été informé qu’il était soupçonné de trafic de drogue, accusation qu’il a réfutée. Il aurait assisté, dans les locaux du commissariat, au passage à tabac d’une autre personne en garde à vue dont il aurait pris la défense. Trois agents lui auraient alors asséné sur-le-champ des coups de poing et de pied, et l’aurait plaqué au sol et menacé d’une arme. Ils lui auraient également adressé des injures racistes, le traitant notamment de «sale Noir». Boaventura Simão Vaz n’aurait pas reçu de soins médicaux au commissariat. Il se serait rendu par la suite aux urgences de l’hôpital San Carlos où il se serait plaint d’une douleur aiguë au côté gauche du thorax. L’hôpital aurait établi en date du 7 mars un rapport médical attestant qu’il présentait cinq côtes cassées et une hémorragie interne et l’aurait gardé plusieurs jours. L’intéressé aurait porté plainte devant un tribunal de Madrid le 13 mars 2001.

11. **Marta Elena Arce**, anthropologue costaricienne établie en Catalogne depuis 1999, aurait été arrêtée pour avoir agressé un agent de police le 2 avril 2001, sur la Plaza de Cataluña, à Barcelone, où elle retrouvait tous les jours d’autres immigrants. Avant son arrestation, l’intéressée aurait participé à l’occupation de l’église de Santa María del Pi, à Barcelone, organisée par des immigrants pour protester contre la politique du Gouvernement en matière d’immigration. Le jour de son arrestation, quatre ou cinq agents auxquels on avait signalé le vol d’un portable se seraient approchés du groupe d’immigrants et leur auraient demandé de présenter le leur. Marta Arce aurait demandé pourquoi elle-même et ses compagnons, précisément, étaient invités à présenter leurs portables, et une discussion s’en serait suivie. Les agents auraient insulté Marta Elena Arce, la traitant de «sale latino», de «pute» et de «débile mentale», et l’auraient frappée. L’intéressée aurait été conduite au commissariat de police de Rambla Nova, dans le

quartier de Ciutat Vella, avant d'être transférée à sa demande à l'hôpital del Mar, dans la zone de Drassanes, où on lui aurait délivré un certificat médical. Les quatre agents qui l'auraient conduite au commissariat l'auraient accusée d'avoir agressé l'un des leurs à l'aide d'une bombe de gaz. Marta Arce aurait affirmé de son côté que celle-ci se trouvait dans sa poche et s'était déclenchée quand elle avait été jetée au sol. Marta Arce aurait été retenue au commissariat jusqu'à 23 heures le lendemain. Elle aurait ensuite été transférée au centre de rétention pour étrangers de la Verneda, où elle aurait passé la nuit avant d'être présentée à un juge. L'après-midi de ce même jour, elle aurait été relâchée. Selon la source, pendant son séjour au commissariat, Marta Arce avait dû dormir sur un matelas posé à même le sol, elle n'avait pas reçu de couverture pendant la première nuit et n'avait pas été autorisée à téléphoner à un avocat ni à ses proches. Les rapporteurs spéciaux ont été informés qu'elle n'avait pas pu voir d'avocat avant le 4 avril.

12. **Ibrahim Saad Llah**, né en Libye et d'origine palestinienne, aurait été agressé par des membres de la Police nationale le 9 mai 2001, dans les locaux du commissariat où il s'était rendu pour effectuer les démarches nécessaires pour passer de Ceuta à la péninsule. Deux agents lui auraient donné des coups de matraque tandis que deux autres lui assénaient des coups de poing. Il aurait été touché au côté, aux jambes, à la tête et au thorax et aurait été détenu au commissariat pendant deux jours. Selon la source, on avait alors tenté de l'expulser vers le Maroc, mais les autorités de ce pays l'avaient refoulé. Après cette tentative, il aurait été abandonné aux alentours immédiats de Sidi Embarek, dans la zone de Rosales. Des passants l'auraient emmené à l'hôpital de la Croix-Rouge qui aurait établi un certificat médical communiqué par la suite au tribunal. Ibrahim Saad Llah aurait porté plainte devant le tribunal de Ceuta contre quatre policiers espagnols.

13. **Abdelhak Archani**, ressortissant marocain résidant dans la commune de Badalona, à Barcelone, aurait été appréhendé en juillet 2001 par trois agents de police en civil qui l'auraient passé à tabac. D'après les informations reçues, les faits s'étaient produits lorsque les agents avaient voulu interroger l'intéressé à propos du vol d'un passeport. Les agents l'auraient fait monter à bord d'un véhicule qu'ils auraient arrêté sur le bas-côté d'une autoroute et l'auraient alors frappé à coups de matraque en proférant des injures racistes. Abdelhak Archani aurait par la suite reçu des soins à l'hôpital de l'Esprit Saint, à Santa Coloma de Gramanet. Les policiers auraient affirmé par la suite qu'ils l'avaient trouvé en état d'ivresse sur la voie publique et qu'ils s'étaient contentés de le reconduire chez lui. Les rapporteurs spéciaux ont appris qu'une information judiciaire avait été ouverte sur les faits et souhaiteraient être informés de l'état d'avancement et des conclusions de cette procédure.

14. **Nouredine Hathout**, ressortissant marocain et gérant d'une société d'exportation sise à Grenade, aurait été insulté et agressé par trois policiers à Málaga, le 24 novembre 2001. Selon les informations communiquées aux rapporteurs spéciaux, Nouredine Hathout attendait à la gare routière de Málaga lorsqu'il avait vu un Marocain d'un certain âge se faire malmener par un jeune homme. Il serait alors intervenu, de même que d'autres personnes, mais le jeune homme se serait alors présenté comme un agent de police. Nouredine Hathout aurait expliqué à son compatriote, en arabe, qu'il avait affaire à la police et ne devait pas opposer de résistance. Celui-ci aurait été emmené dans un local situé dans les parages dont il serait sorti peu de temps après en affirmant avoir été insulté, ajoutant qu'un autre Marocain qui ne parlait pas espagnol se trouvait encore à l'intérieur. Nouredine Hathout aurait frappé à la porte pour proposer ses services comme interprète mais un agent lui aurait conseillé de ne pas intervenir, l'aurait bousculé et lui aurait demandé ses papiers. Devant ses protestations, l'agent l'aurait agrippé à la

poitrine et poussé contre le mur puis entraîné immédiatement à l'intérieur. Là, trois agents lui auraient adressé des injures racistes, l'auraient fouillé, accusé de trafic de drogue et auraient menacé de bloquer la procédure d'acquisition de la nationalité espagnole qu'il avait mise en route. Nouredine Hathout aurait ensuite été conduit dans un commissariat de police et se serait vu refuser pendant plus d'une heure le droit de prendre contact avec un avocat et d'être emmené à l'hôpital. Par la suite, d'autres agents étaient arrivés et il aurait été transféré à la clinique Carlos Haya, où il aurait subi un examen médical qui aurait permis de constater la présence de contusions et d'écorchures des deux côtés du cou. Il aurait ensuite été reconduit au commissariat où il aurait à nouveau été frappé. (...) Le 26 novembre, une plainte aurait été déposée contre les agents impliqués devant le juge de permanence de Grenade.

15. Selon des informations communiquées aux rapporteurs spéciaux, la police avait lancé l'assaut le 22 janvier 2002 contre des immigrés sans papiers qui revendiquaient l'octroi de permis de séjour et de travail en manifestant pacifiquement dans l'Alcazaba, la forteresse d'Almería. L'affrontement aurait débouché sur 11 arrestations et fait jusqu'à 20 blessés. La police aurait utilisé des gaz lacrymogènes et tiré des balles en caoutchouc pour disperser les quelque 300 manifestants. Les personnes arrêtées auraient été conduites dans un commissariat de police où elles auraient été à nouveau frappées; elles n'auraient pas été autorisées à aller aux toilettes et n'auraient reçu ni nourriture ni couverture pendant 48 heures. Selon le Gouvernement, il n'y avait eu que deux blessés légers mais la Croix-Rouge aurait indiqué pour sa part que jusqu'à 20 personnes avaient subi les effets des gaz lacrymogènes, été frappées par la police ou piétinées par d'autres manifestants en cherchant à échapper à la charge policière. Des arrêtés d'expulsion auraient été pris contre les clandestins en question et huit ressortissants marocains auraient été transférés dans le centre de rétention pour étrangers de Valence, où ils seraient restés quatre jours, sans soins médicaux, malgré leur état pitoyable.

16. Les rapporteurs spéciaux ont également reçu des informations sur les conditions de vie dans plusieurs centres d'accueil pour jeunes immigrés gérés par les administrations régionales de la protection sociale (*Consejerías de Bienestar Social*) de Ceuta et Melilla, en particulier dans le centre du Fort de la Purísima Concepción de Melilla et le centre San Antonio de Ceuta, où le surpeuplement serait extrême<sup>3</sup>. Les rapporteurs spéciaux ont notamment reçu des informations sur les cas particuliers suivants:

17. **Mohamed Garbagui**, qui est âgé de 13 ans, aurait été arrêté dans la rue par une patrouille de la police de Ceuta, qui l'aurait conduit au centre d'accueil de San Antonio. Là, deux éducateurs l'auraient conduit dans une cellule disciplinaire où ils l'auraient déshabillé, frappé à mains nues et avec un bâton et giflé. Ils ne lui auraient pas donné assez à manger, auraient confisqué son oreiller et l'auraient obligé à coucher par terre. Le jeune garçon se serait enfui du centre et, accompagné par le représentant d'une organisation non gouvernementale, se serait présenté dans une clinique où il aurait reçu les soins médicaux qu'exigeaient ses blessures. Le 29 juin 2001, il aurait porté plainte devant la deuxième juridiction d'instruction de Ceuta. Il avait déjà déposé une autre plainte auprès de la Direction générale de la police de Ceuta. Les rapporteurs spéciaux souhaiteraient recevoir des informations sur l'état d'avancement de ces procédures. Ce ne serait pas la première fois que des mauvais traitements auraient été infligés à des mineurs dans le centre d'accueil. D'après les informations reçues, le parquet des mineurs

---

<sup>3</sup> Le détail des allégations relatives au traitement des mineurs immigrants non accompagnés, à Ceuta et Melilla, peut être consulté auprès du Secrétariat.



de Ceuta avait ouvert en 2000 une enquête sur des accusations de violences sexuelles contre 12 au moins des enfants du centre. Les rapporteurs spéciaux souhaiteraient également recevoir des renseignements complémentaires sur cette enquête.

18. **Said M.** et **Hassan U.**, deux immigrés algériens dont le premier a 17 ans, auraient été frappés par la police locale de Ceuta au moment de leur arrestation, le 14 octobre 2000, puis au commissariat de police où ils avaient été conduits par la suite après avoir été poussés brutalement à bord d'un véhicule. (...) Au commissariat, Said M. aurait perdu connaissance; on l'aurait réanimé en l'arrosant avec un tuyau d'arrosage qui aurait aussi été utilisé pour le frapper. À nouveau contraints de monter à bord d'un véhicule de police, les deux hommes auraient encore été battus puis conduits à l'endroit où ils avaient été arrêtés. Ils y auraient été retrouvés par des membres de la guardia civil auxquels ils auraient demandé de l'aide et qui les auraient conduits à l'hôpital de l'Institut national de la santé (Insalud) de Ceuta. Le rapport médical rédigé sur leur cas fait état de plusieurs lésions et coupures et, le 19 octobre 2000, un journal aurait publié une photo des blessures qui auraient été causées à l'un d'entre eux.

19. **Shihab R.** (pseudonyme), mineur, aurait été arrêté par des membres des forces de police de Ceuta à la fin du mois d'octobre 2001 sur le port où il s'apprêtait à tenter la traversée vers la péninsule espagnole. Il aurait été contraint de monter à bord d'un véhicule et conduit dans un commissariat puis transféré à la caserne de la guardia civil. Pendant le trajet, il aurait été frappé aux bras, aux jambes et à la tête. Il aurait également reçu des coups de matraque et des coups de pied. Selon les informations reçues, il avait de nouveau été roué de coups dans les locaux de la guardia civil où il avait été enfermé dans une pièce pendant trois heures avant d'être amené au centre San Antonio. Le rapport médical établi par l'Institut national de la santé (Insalud), le 2 novembre 2001, fait état d'une fracture stable du second métacarpe de la main gauche. L'intéressé n'aurait pas reçu de soins jusqu'à ce que les Carmélites de la Caridad de Vedruna le conduisent à l'hôpital de la Croix-Rouge.

20. **Omar H.** (pseudonyme), 16 ans, serait arrivé à Ceuta de Tanger en septembre 2001. Quelques jours après son arrivée en Espagne, il aurait été arrêté par des policiers. Omar H. leur aurait dit qu'il était mineur mais aurait cependant été conduit dans un commissariat où il serait resté un jour entier. Selon les informations fournies, il avait reçu pendant ce séjour des coups de matraque sur le dos et les cuisses. Il aurait ensuite été conduit au centre San Antonio.

21. **Salah S.** (pseudonyme), mineur hébergé au centre du Fort de la Purísima Concepción, aurait été roué de coups par deux membres du personnel de cet établissement en octobre 2001 après une altercation avec un autre occupant. Selon les informations fournies, il avait reçu des gifles et des coups de pied dans les mollets.

22. **Ayman M.** (pseudonyme), 16 ans, aurait été renvoyé au Maroc le 28 juillet 2001 après avoir passé huit ans à Melilla. Selon les informations reçues, le directeur du centre où il était hébergé l'avait informé qu'il serait conduit devant un juge avec un autre mineur du même centre et d'autres jeunes résidant dans d'autres centres d'accueil. Cependant, l'ensemble des intéressés auraient été conduits directement à la frontière avec le Maroc et remis aux autorités policières marocaines de la ville de Nador. Ils auraient ensuite été conduits dans un commissariat où les policiers, qui portaient des bottes, leur auraient marché sur les pieds, alors qu'ils étaient très légèrement chaussés. On leur aurait demandé d'où ils venaient et comment ils étaient arrivés à Melilla et on les aurait enfermés dans un dépôt. Avant d'être relâchés, ils auraient été frappés

avec une matraque électrique à haute tension par une dizaine de policiers. Ayman aurait présenté par la suite des contusions au poignet gauche. Selon les informations reçues entre le 27 juillet et le 18 septembre 2001, les autorités de Melilla avaient expulsé au moins 32 mineurs non accompagnés âgés de 11 à 17 ans et le nombre des expulsions de ce type avait atteint au moins 70 en février 2002. (...).

23. Quarante mineurs étrangers âgés de 13 à 17 ans et résidant au centre du Fort de la Purísima, à Melilla, auraient entamé une grève de la faim le 4 mars 2002 pour protester contre la politique de regroupement familial en vigueur, inefficace selon eux puisqu'ils n'avaient pas de famille qui les attendait de l'autre côté de la frontière. En outre, ils entendaient protester contre le fait qu'on ne leur avait pas accordé de permis de séjour, à l'expiration du délai de neuf mois prévu par la loi, et contre les mauvais traitements infligés par certains des éducateurs du centre.

## 2. Réponse du Gouvernement espagnol

24. En una comunicación con fecha 14 de noviembre 2002 el Gobierno de España transmitió la siguiente información:

25. La detención de **D. Boaventura Simao Vaz**, se produce cuando en compañía de otro ciudadano de Guinea-Bissau, se dirigen a dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía vestidos de paisano que se encontraban en servicio y a los que el interesado les ofrece pastillas, que exhibe, por 500 pesetas. Momento en que los funcionarios de policía muestran sus respectivas placas emblemas y carnés profesionales. El Sr. Simao intenta darse a la fuga, por lo que los funcionarios intervienen rápidamente originándose un forcejeo con los agentes, causando lesiones a uno de los policías al que el referido agarrándole por el pelo golpea contra la calzada, produciéndose lesiones en la región occipital derecha, motivo por el que debe ser asistido de urgencia. El Sr. Simao y el otro compatriota que le acompañaba fueron finalmente detenidos, para lo cual se tuvo que emplear la fuerza mínima imprescindible, ya que ofrecieron importante resistencia, comenzando a proferir insultos y gritos. Durante la detención del reseñado se le ocupó un cuchillo de grandes dimensiones. De los hechos acaecidos se tramitaron las correspondientes diligencias informando a los detenidos de los motivos de su detención así como de sus derechos constitucionales, en acta escrita. El Sr. Simao tuvo que ser asistido en el Hospital Clínico San Carlos y tras ser emitido el parte médico correspondiente regresó nuevamente a los calabozos.

26. En el caso de **Marta Elena Arce Salazar**, el Gobierno de España expone que, el 2 de abril de 2001 una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía de servicio en Las Ramblas, Barcelona, fue requerida por unos jóvenes, manifestando a los agentes que habrían sido asaltados por un grupo de magrebíes, apoderándose éstos del teléfono móvil que portaba uno de ellos. Instantes más tardes la dotación policial procedió a la identificación de un grupo de jóvenes de similares características a las descritas sobre el grupo autor del hecho directivo, comprobando si alguno de ellos portaba el teléfono móvil sustraído. Momentos más tarde las víctimas del robo se presentaron sin identificar a ninguno de los jóvenes interceptados como autor del asalto. Cuando la dotación policial devolvía las documentaciones, se acercó una mujer, increpando a los agentes en actitud ofensiva y negándose a identificarse. La mujer se situó en medio de la calzada, soltándose violentamente de la sujeción policial y sacando del bolso un aerosol de defensa personal con la intención de utilizarlo contra el agente, hecho que no logró, si bien inició una serie de agresiones a los integrantes de la dotación policial, hasta que finalmente fue detenida e

identificada como Marta Elena Arce Salazar. Fue informada de sus derechos y trasladada al Hospital Percamps de Barcelona, donde fue atendida al igual que un agente de policía, extendiéndose los correspondientes partes facultativos. Luego fue trasladada a la Comisaría de distrito de Ciutat Vella. Se le designó al letrado D. José Luis Villar. Posteriormente el Colegio de Abogados comunicó a la Comisaría que el letrado designado se encontraba de baja por enfermedad, solicitándose uno de oficio, siendo designado el colegiado N° 19632. El trato recibido por Marta Elena Arce Salazar fue el mismo acordado a cualquier detenido.

27. **Ibrahim Saad Ellah** que dice ser Palestino nacido en Libia, fue detenido por policías afectos al Grupo Operativo de Fronteras de la Unidad de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Policía de Ceuta conforme a ley y quedando anotado en el libro de detenidos. Como quiera que Ibrahim Saad Ellah decía ser palestino, los actuantes procedieron a practicarle un cacheo al objeto de comprobar si entre sus ropas portaba algún documento aclarando su identidad. Esta persona se negó a ser cacheado y adoptó una actitud de impedimento activo a la actuación, por lo que tuvo que ser compelido contundentemente para ello, dando resultado negativo. La persona no fue sometida a trato denigrante ni vejatorio alguno. Al mismo tiempo se estableció contacto telefónico con la Representación Palestina en Madrid, quienes, tras mantener conversación directa con el detenido afirmaron que por su forma de hablar tal persona no era palestino, sino más bien marroquí. El 8 de mayo de 2001 se procedió a su deportación a las 20.00 horas. Al insistir ante la Policía Marroquí que era palestino, dichos policías no lo admitieron al país dejándolo en libertad. La denuncia interpuesta por Ibrahim Saad Ellah fue sobreseída por el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de los de Ceuta el 18 de agosto de 2001. Posteriormente una demanda de asilo en España formulada por la persona fue denegada por la autoridad competente y en la actualidad se encuentra en paradero desconocido.

28. Las diligencias judiciales realizadas en torno al caso de **Abdelhak Archani** indican que efectivamente fue trasladado en un vehículo policial, pero no a la fuerza, sino de forma voluntaria. Éste se encontraba ante la Subdelegación del Gobierno de Barcelona vendiendo turnos para la cola de extranjeros que esperaban hacer trámites administrativos y dicho comportamiento ocasionó numerosas discusiones entre los extranjeros que esperaban su turno, siendo necesaria la intervención policial. Como quiere que el denunciante presentaba evidentes síntomas de embriaguez, policías le advirtieron que debía abandonar el lugar y se ofrecieron a trasladarlo a su domicilio. Durante el trayecto, éste manifestó una dirección incorrecta y luego mostró su deseo de abandonar el vehículo. Las investigaciones realizadas y el informe del médico forense demuestran que en ningún momento fue objeto de malos tratos por parte de la policía. El caso fue sobreseído provisionalmente, al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito.

29. El caso en el que **Nourdeine Hathout** está imputado por el delito de atentado, está pendiente de resolución, aunque figura señalado el juicio para el 29 de octubre de 2002. En las diligencias policiales consta que la persona fue debidamente informado de los derechos que le asisten, siendo asistido durante su declaración por un letrado del Colegio de Abogados de Málaga y puesto en libertad al término de 21,50 horas de detención. También consta que fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Carlos Haya donde fue asistido, al igual que uno de los funcionarios actuantes, en ambos casos se extendieron los oportunos partes de asistencia que se adjuntaron a las diligencias.

30. Durante los días 21 y 22 de enero de 2002 se produjeron concentraciones de extranjeros dirigidas por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), iniciándose frente a las dependencias de la Subdelegación del Gobierno en la Plaza López Falcón, de Almería. El Cuerpo Nacional de Policía intervino para evitar que las personas acamparan en el lugar, permitiendo el paso a los extranjeros que pretendían acceder a la Oficina de Extranjeros para realizar trámites administrativos. Llegada la hora de cierre de dicha oficina, permanecían concentradas unas 500 personas, procediéndose a su identificación por parte de la policía.

Se produjeron 9 detenciones, 8 en aplicación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, y 1 por resistencia a la autoridad. En la madrugada del 22 de enero, en el Cerro San Cristóbal se fueron concentrando un número aproximado de 200 extranjeros con la intención de acampar en el lugar. La Subdelegación de Gobierno dio instrucciones a los miembros de la Policía para disolver a los concentrados. Tras los preceptivos avisos verbales se inició la actuación policial según los dispositivos establecidos, sufriendo los policías actuantes continuas agresiones y lanzamiento de piedras por parte de los concentrados. Se practico un total de 31 detenciones, resultando algunos de ellos lesionados principalmente por las carreras emprendidas y caídas, debido a la escasez de luz y lo accidentado del terreno.

Del total de heridos 3 fueron policías y 13 extranjeros, 6 de los cuales fueron atendidos *in situ*. Los restantes fueron trasladados a un centro asistencial, atendidos por contusiones leves y cefaleas, permaneciendo uno de ellos en observación hasta las 23.59 horas bajo una crisis de ansiedad. La actuación policial fue ajustada a ley y velando por la protección de los derechos de las personas.

31. En cuanto a la situación de **menores no acompañados**, en España, tanto los principios constitucionales sobre el niño y la familia, como las disposiciones de la Ley de Protección Jurídica del Menor parten de las Convenciones Internacionales al respecto y en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. Por otra parte la vigente Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como su reglamento regula de forma precisa la actuación pública en los casos de menores extranjeros no acompañados. Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localizan a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede ser establecida con seguridad, el Ministerio Fiscal dispone la determinación de la edad con la colaboración de las instituciones sanitarias. Si se trata de un menor y durante el período de determinación, la persona es puesta a disposición de los Servicios competentes de Protección a Menores, por el Ministerio Fiscal, competencia que corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas. La Administración General del Estado resuelve la reintegración al país de origen o de residencia de la familia del menor o bien su permanencia en España, después de haberlo oído y previo informe de los Servicios de Protección de Menores. Transcurridos nueve meses que el menor ha sido puesto a disposición de los Servicios de Protección de Menores y si el retorno no ha sido posible, se procede a documentarle con el fin de asegurar su integración.

32. Sobre el supuesto maltrato a menores en el **Centro de San Antonio, actualmente llamado Centro “La Esperanza”, dependiente de los Servicios de Protección social de la ciudad de Ceuta**, se realizan las siguientes puntualizaciones:

33. El centro se instaló en 1999, en una antigua residencia militar. En él se recogieron a unos 70 menores no acompañados a los que se les proporcionó comida, vestuario, alojamiento y formación, aunque al principio las condiciones de alojamiento no fueron ideales. En marzo de 2001 se iniciaron obras de ampliación que permiten el alojamiento en torno a 110 menores.

No es cierto que en el centro estuvieran alojadas niñas y que los menores carecieran de espacio de ocio. El centro es de menores varones y cuenta con amplias zonas verdes. Los menores acogidos cuentan con una total libertad ambulatoria para entrar y salir en los horarios establecidos. No es cierto que los menores hayan sido encerrados en un “cuarto pequeño, oscuro y sucio”. El trato a los menores es profesional y totalmente alejado de cualquier visión autoritaria de la atención social. Todos los menores acogidos se encuentran escolarizados, sin perjuicio de que alguno de ellos cuya edad supere los 17 años, no asista a las correspondientes clases dada la libertad ambulatoria que gozan. El Adjunto al Defensor del Pueblo, alto comisionado para el Parlamento español el control de la Administración realizó una visita al centro el 10 de mayo de 2001, descartó la existencia de malos tratos y señaló no tiene ninguna investigación abierta en esta materia.

34. En Ceuta no se ha producido ningún caso de menores que, no pudiendo retornar a sus países o quedar a disposición de los servicios de protección de menores de Marruecos, hayan sido retornados sumariamente. (...) En Ceuta, la Comisaría General de Extranjería y Documentación gestionó ante la Embajada de Marruecos en Madrid la repatriación de menores a su país, contestando la representación diplomática que se realicen las gestiones directamente con las autoridades de la provincia de Tetuán, las cuales se encargarían de llevar a cabo la reintegración familiar. En virtud de ello, la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ceuta se pone en contacto con las citadas autoridades y transcurrido un plazo no inferior a 15 días desde la comunicación del acuerdo de reagrupamiento familiar, presenta a los menores para cumplir con tal principio.

35. En cuanto a la afirmación que no “existe ningún organismo oficial relativamente responsable de garantizar que los niños no acompañados en Ceuta reciban un cuidado y la protección a los que tienen derecho por ley”, es ésta una afirmación gratuita. Por ley, la Ciudad Autónoma de Ceuta ejerce estas competencias y responsabilidades a través de la Consejería de Bienestar Social. No existe ninguna delegación de competencias ni de responsabilidades de los funcionarios de Gobierno de la Nación en autoridades locales, cada uno ejerce las que tiene asignadas según el ordenamiento jurídico y de producirse algún abuso del que tuviera conocimiento no sólo las autoridades y los funcionarios sino cualquier ciudadano español, vienen obligados pro ministerio de ley a poner en conocimiento del Juez o funcionario fiscal más próximo. La coordinación entre las administraciones (Central y Autonómica) es permanente y fluida y se lleva a cabo entre la Consejería de Bienestar Social, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Delegación del Gobierno.

36. El 20 de junio 2002 fueron remitidas diligencias policiales al Juzgado de Instrucción Número dos de los de Ceuta, imputando a dos cuidadores del Centro de Menores San Antonio como presuntos autores de unas lesiones causadas a **Mohamed Garbagui**. Consultado dicho juzgado informó que tal procedimiento ha sido archivado. La última constancia de la presencia del menor en Ceuta fue el 22 de febrero de 2002, fecha en que fue detenido por orden del Juzgado de Menores de la ciudad.

37. El 14 de octubre 2000, fuerzas de la Guardia Civil instruyeron un atestado por supuesta agresión con resultado de lesiones en el que consta como denunciante, los dos ciudadanos argelinos, **Said Mohamed y Hassan Uaharami** y que según declaran se produjo a las 22.00 horas del día anterior. Consultado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres informó verbalmente que el 13 de abril el procedimiento había sido archivado.

Tanto en este caso como en el anterior el archivo es una declaración de voluntad judicial que pone fin al proceso por falta de presupuestos necesarios para decretar la apertura a juicio oral y, en su caso, dictar auto de procesamiento.

38. No se tiene noticia alguna de que en el **Centro de Menores San Antonio** se haya producido ningún tipo de abusos sexuales. No obstante el 14 de abril de 2000, la Directora del Centro puso en conocimiento de la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía que un individuo conduciendo un auto solía merodear por los alrededores de la zona buscando menores para abusar sexualmente de los mismos. Miembros del Grupo de Menores del Cuerpo Nacional de la Policía iniciaron investigaciones que resultaron en la detención de tres individuos a los que se les instruyeron diligencias policiales, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Número Cuatro. Todos ellos fueron puestos en libertad. Sobre este asunto se interesó el Defensor del Pueblo, el cual promovió investigación sumaria e informal, facilitándosele, en síntesis, la información que precede y en escrito de 2 de octubre de 2000 dio por concluida la investigación.

39. En los casos de **Shihab R.** y **Omar. R.** no se tiene constancia de los hechos relatados y resulta imposible comprobar la veracidad de la denuncia que posibilite poner en marcha la correspondiente investigación sobre los hechos denunciados. En el caso de **Salh S.**, los hechos que se relatan en las alegaciones de los Relatores no responden a la realidad. Las lesiones sufridas por el mismo fueron ocasionadas por otro menor interno, limitándose los trabajadores del Centro de Menores Purísima Concepción de Melilla a separar a ambos menores y recabar asistencia médica. No se ha podido constatar el expediente de **Ayman M.**; no obstante, se niega que una repatriación se haya producido en las circunstancias descritas en las alegaciones. En 2002 se han realizado 72 repatriaciones de menores en Melilla y en ninguna de ellas se ha utilizado esposas, ni mucho menos los menores han sufrido malos tratos por parte de autoridades.

### 3. Observations du Rapporteur spécial

40. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement espagnol pour sa réponse for détaillée. Etant donné que l'Espagne est devenu un point de passage d'une immigration continue vers l'Europe il recommande aux autorités espagnoles de prendre des mesures pour faire en sorte la dignités des migrants, qu'il soient illégaux ou non soit respectées, conformément aux instruments internationaux des droits de l'homme auxquels l'Espagne est partie. Le Rapporteur spécial suggère que les agents de la police des frontière et de la Garde Civile soient mis au fait de ces texte notamment par le biais de séminaires de formation auxquels le Haut Commissariat aux droits de l'homme pourrait être associé.

## C. **Fédération de Russie**

### 1. Communication dated 28 August 2002

#### General Manifestations of racism, racial discrimination and xenophobia.

41. It has been reported that there is a growing trend of violence against ethnic minorities, foreigners in the Russian Federation. Generally, the victims of racist attacks include persons from Africa, Asia, Central Asia, the Caucasus, including ethnic Chechens, and refugees and asylum-seekers. It is alleged that law enforcement officers are reluctant to register attacks as

racist when there is evidence that the attacks are racially motivated and that officers fail to understand the serious implications of racially-motivated violence. Police and other law enforcement officials themselves are routinely accused of subjecting racial and ethnic minorities to harassment and intimidation.

42. Specific examples illustrating the above-mentioned treatment include the following incidents:

- It is reported that when **Adefers Dessu**, an Ethiopian refugee, and his wife Sarah were beaten by a 20 years-old boy armed with chains in Moscow in February 2001, the medical report stated that their injuries were the result of a “fall” and the police registered the attackers as minors.
- In October 2001, when a crowd of 300 youths brandishing iron bars attacked a Moscow market staffed by ethnic minorities and left an Armenian, an Indian and a Tajik dead, initial police statements referred to the perpetrators as football “hooligans.” In the Siberian city of Tiumen, a series of seven attacks on a synagogue last year were characterized as “young people’s hooliganism.”

#### Incitement to racism, racial harassment, race-related torture and Ill-Treatment by State Agents

43. In addition, it is alleged that authorities have neglected to respond to racist statements by public figures in Russia’s regions and that federal authorities allow city and regional authorities to ignore federal laws governing freedom of movement that discriminate against ethnic and racial minorities. It is reported that members of racial and ethnic minorities are disproportionately targeted for document checks on the street, which commonly leads to extortion and can result in detention, torture and ill-treatment.

44. Following are reported incidents:

- On 19 April 2002, reportedly members of the Moscow city and Moscow district organized crime force (RUBOP) were implicated in the torture, ill-treatment, extortion and fabrication of evidence against Tajik migrant workers. It is alleged that their actions were accompanied by racist insults and stereotyping of Tajiks as Islamic fundamentalist fighters and drug dealers. Authorities are accused of blocking attempts by the victims to formally complain.
- It is alleged that Krasnodar authorities refuse to grant residence permits to approximately 13,000 Meskhetian Turk residents in Krasnodar Territory, rendering them “stateless” and unable to work legally or to own land. On 1 April 2002, Krasnodar authorities announced the establishment of deportation centers, staffed by paramilitary units, to deport those accused of being “illegal migrants.”

#### 2. Réponse du Gouvernement de la Fédération de Russie en date du 20 août 2002

45. En ce qui concerne l’organisation de troubles et d’actes de hooliganisme ayant causé la mort de trois personnes près de la station de métro «Tsaritsyno» à Moscou le 30 octobre 2001, des poursuites pénales ont été engagées en vertu des articles 105 (meurtre), 111 (atteintes

volontaires graves à l'intégrité physique), 212 (troubles) et 213 (hooliganisme) du Code pénal de la Fédération de Russie. Dix individus ont été inculpés. L'instruction est close et le tribunal de la ville de Moscou a commencé à examiner l'affaire le 16 juillet 2002.

46. Le 28 octobre 2001, une action pénale a été engagée du chef de l'infraction visée à l'alinéa *a* du paragraphe 2 de l'article 213 du Code pénal contre des individus non identifiés pour le bris des vitres de l'immeuble en construction de l'association culturelle juive «Aviv» à Tioumen. Le 10 février 2002, les poursuites ont été abandonnées en raison de l'impossibilité d'identifier les auteurs des faits incriminés. Le 19 septembre 2002, la décision de l'organe d'enquête de classer l'affaire a été annulée par la Procuration de la Région de Tioumen, qui a demandé un complément d'information.

47. En juin 2001, des actes analogues ont eu lieu contre un immeuble de l'association «Aviv». Le 2 juillet 2001, l'organe d'enquête de la Direction des affaires intérieures de la ville de Tioumen a décidé de ne pas engager d'action pénale au motif de l'absence de gravité des faits. Le 23 septembre 2002, la Procuration a annulé la décision de ne pas engager de poursuites du chef de l'infraction visée à l'article 213 du Code pénal de la Fédération de Russie (hooliganisme).

48. Il n'existe pas d'indices suffisants pour conclure que ces infractions ont été motivées par la haine nationale ou raciale.

49. La Procuration de la ville de Moscou a décidé de vérifier les informations selon lesquelles des fonctionnaires de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée de la ville et de la Région de Moscou auraient participé à des actes de torture, d'extorsion et de fabrication de preuves contre des immigrants tadjiks. À ce jour, l'enquête n'a pu être menée à bien du fait de l'absence, dans la communication, d'éléments concrets concernant le lieu où les fonctionnaires de la milice auraient commis ces actes répréhensibles et d'information sur le recours que les victimes auraient éventuellement adressé aux organes de l'application des lois. La Procuration de la Région de Moscou a établi, à ce sujet, qu'aucune mesure n'avait été prise le 19 avril 2002 à l'encontre de citoyens tadjiks par des fonctionnaires de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée de la Direction principale des affaires intérieures de la Région de Moscou.

50. Au cours de la vérification des informations selon lesquelles deux réfugiés éthiopiens, M. Adefers Dessu et son épouse Sarah, auraient été agressés par un groupe de jeunes armés de chaînes, il a été établi ce qui suit:

Selon les informations transmises par l'Ambassade d'Éthiopie, l'agression a eu lieu sur le territoire du district de Podolsk de la Région de Moscou. La vérification des registres pour 2001 et le début de 2002 ne fait apparaître aucune plainte déposée par les intéressés au sujet de leur agression par des inconnus. On vérifie actuellement tous les établissements hospitaliers de la Région de Moscou auxquels les époux Dessu auraient pu s'adresser pour recevoir des soins. Les résultats de l'enquête opérationnelle font l'objet d'un contrôle.

La Procuration générale de la Fédération de Russie a procédé à maintes reprises au cours des sept dernières années à des enquêtes sur le respect des droits fondamentaux des Turcs Meskhètes établis dans le Territoire de Krasnodar.



Les problèmes liés à l'installation des intéressés dans cette région de Russie ont commencé à se poser après que des troubles interethniques eurent éclaté en Ouzbékistan en 1989.

Conformément à l'arrêté n° 503 du 26 juin 1989 du Conseil des ministres de l'URSS, sur les dispositions relatives aux conditions de séjour dans les régions de la RSFSR des Turcs contraints de quitter leur lieu de résidence permanent en RSS d'Ouzbékistan, et compte tenu des possibilités existantes de garantir l'hébergement des intéressés et leur jouissance de conditions de vie normales, un lieu de résidence permanente a été attribué à cette catégorie de citoyens soviétiques dans les régions de la zone hors tchernoziom de la RSFSR (dont la Région de Moscou), ainsi que dans les Régions de Belgorod, Voronej et Koursk.

Bien que le Territoire de Krasnodar ne figure pas parmi les régions désignées pour cette réinstallation et ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire, en 1989 et 1990, après les massacres survenus dans les Régions de Fergana et Tachkent de la RSS d'Ouzbékistan, environ 15 000 Turcs Meskhètes sont venus s'y installer de leur propre initiative (dont 10 000 dans les arrondissements d'Abinsk et de Krymsk), en vue de s'établir ensuite définitivement dans la région d'Akhalsikhe en Géorgie, dont ils sont originaires.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 23 de la loi de la Fédération de Russie sur le droit des citoyens de la Fédération de Russie de se déplacer librement et de choisir librement leur lieu de séjour et de résidence à l'intérieur des frontières nationales, le lieu de résidence désigne la maison, l'appartement ou toute autre habitation où une personne réside en permanence ou la plupart du temps en qualité de propriétaire, en vertu d'un contrat de mise à disposition ou de bail, ou pour tout autre motif prévu par la législation russe.

La majorité des Turcs Meskhètes ne font pas enregistrer le titre de propriété du logement qu'ils ont acquis. En outre, dans la plupart des cas, cette acquisition n'a pas fait l'objet d'un contrat écrit.

Ne disposant pas des pièces attestant l'acquisition légale de leur logement visées à l'article 6 de la loi susmentionnée, les propriétaires ne peuvent pas se faire enregistrer dans le lieu de résidence qu'ils ont choisi.

Faute souvent de détenir un titre légal de séjour permanent (permis de résidence), la majorité des Turcs Meskhètes ne peuvent pas jouir du droit d'être reconnus citoyens de la Fédération de Russie en vertu de la loi fédérale sur la citoyenneté russe. Actuellement, sur les 15 500 Turcs Meskhètes présents dans le Territoire de Krasnodar, environ 12 000 sont apatrides.

La question de l'acquisition de la nationalité russe par les Turcs Meskhètes vivant concentrés dans ce Territoire doit être réglée au cas par cas en appliquant strictement la loi susvisée. Ainsi, selon les informations communiquées par le tribunal du Territoire de Krasnodar, les tribunaux de district d'Abinsk, d'Anapa, de Beloretchensk et de Krymsk ont examiné 42 demandes déposées par des Turcs Meskhètes en vue d'établir la légalité de leur résidence sur le territoire russe avant l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté russe.

Trente-sept demandes examinées ont été approuvées. Le tribunal de district de Krymsk et le tribunal du district de Primorsk à Novorossijsk ont répondu favorablement à deux plaintes déposées par des Turcs Meskhètes au sujet du refus des fonctionnaires du Service des passeports et des visas de les enregistrer.

Actuellement 4 000 Turcs Meskhètes sont officiellement enregistrés dans leur lieu de résidence. Environ 3 000 d'entre eux ont pu faire établir leur citoyenneté russe.

Pendant la période allant du début de 2000 à juin 2001, les bureaux d'état civil ont enregistré 548 enfants turcs meskhètes.

Selon les données communiquées par les agences pour l'emploi des districts ayant une forte concentration de population turque meskhète, aucun membre de cette communauté n'était inscrit comme chômeur aux fins de l'attribution d'un emploi au début de l'année en cours.

Les questions relatives au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la défense des intérêts de l'État et des droits légitimes des habitants du Territoire de Krasnodar, sont constamment au centre de l'attention des organes de la Procuration. Le groupe de travail, composé de représentants de la Direction du Service fédéral de sécurité, de la Direction générale des affaires intérieures et de la Direction générale de la justice du Territoire de Krasnodar, qui a été mis en place auprès du Procureur du Territoire, veille à la conformité des actes de tous les organes du pouvoir d'État ayant compétence pour prévenir et réprimer les manifestations d'extrémisme politique par des organisations et associations sociales et religieuses.

La situation concernant la définition de la situation juridique des Turcs Meskhètes a été maintes fois examinée au niveau fédéral. En particulier, par son arrêté n° 1280-r du 14 août 2000, publié en application de l'ordonnance présidentielle n° K-285 en date du 24 mars 2000, le Gouvernement russe a reconduit dans ses fonctions la Commission interministérielle pour le règlement de la question des Turcs Meskhètes résidant sur le territoire russe.

Lors de sa première réunion, le 28 septembre 2000, la Commission a adopté un plan d'action visant à stabiliser la situation ethnique et politique dans les zones de forte concentration de la population turque meskhète au sud de la Russie.

Les principales dispositions de ce plan prévoient de régler la question du rapatriement des Turcs Meskhètes dans leur région d'origine sur le territoire géorgien et de faciliter le retour de ceux qui le souhaitent en Géorgie, ainsi que d'établir la situation juridique des Turcs Meskhètes qui souhaitent acquérir la citoyenneté russe et les modalités concernant la délivrance de pièces d'identité aux intéressés.

Le 14 mars 2001, le groupe spécial de travail interministériel a constaté que la question devait nécessairement être réglée à l'échelon interétatique. Le sondage effectué conformément aux recommandations du Ministère auprès de 1 989 familles turques meskhètes (soit 10 644 personnes) a permis d'établir que 568 familles souhaitaient rester

dans le Territoire de Krasnodar, 125 familles souhaitent se rendre dans un autre État et 1 044 familles souhaitent regagner leur patrie d'origine.

Il convient par ailleurs de noter qu'aucun Turc Meskhète n'a été expulsé du Territoire de Krasnodar.

Les obligations que la Géorgie a contractées lors de son entrée au Conseil de l'Europe en ce qui concerne le rapatriement sur son territoire des Turcs Meskhètes sont restées sans effet. De même, aucune mesure n'a été prise depuis la publication en 1996 du décret du Président géorgien sur le rapatriement des intéressés.

51. Compte tenu de ce qui précède, les informations figurant dans la communication du Rapporteur spécial au sujet du refus des autorités de Krasnodar de délivrer des permis de résidence à 13 000 Turcs Meskhètes, ainsi que celles concernant la création de «centres de déportation», dont le personnel serait composé de représentants de groupes paramilitaires, ne correspondent pas à la réalité.

### 3. Observations of the Special Rapporteur

52. Le Rapporteur spécial remercie le Gouvernement russe de sa réponse. En ce qui concerne les manifestations générales de racisme et l'incitation à la haine ethnique le Rapporteur spécial recommande aux autorités russes d'organiser une campagne nationale contre la discrimination raciale et en faveur de l'harmonie sociale. S'agissant des actes de hooliganisme ayant causé la mort de trois personnes près de la station de métro «Tsaritsyno» à Moscou le 30 octobre 2001, il souhaiterait être informé des conclusions du Tribunal de la ville de Moscou. En ce qui concerne le comportement des forces de police à l'égard des minorités ethniques et raciales et des étrangers, le Rapporteur encourage les autorités de la Fédération de Russie à prendre des mesures destinées à améliorer le comportement de la police de manière que ses actes soient plus conformes au respect des droits de l'homme. De telles mesures pourraient consister à former les agents de police aux droits de l'homme et notamment à la non-discrimination dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin le Rapporteur spécial prend note des informations détaillées relatives aux efforts en cours pour trouver une solutions au séjour et à la nationalité des Turcs Meskhètes. Il reste attentif à la résolution de cette situation fort préoccupante.

## D. Grèce

### Joint communication of 13 September 2002, sent together with the Special Rapporteur on Torture

#### 1. Summary of Allegations

53. The Special Rapporteurs have received information on the following individual cases:

54. **Lazaros Bekos** and **Eleftherios Kotropoulos**, two Roma youths aged 17 and 18 respectively, were reportedly beaten during their detention in Mesolongi police station on 8 May 1998. A forensic report allegedly stated that both of them received "medium bodily injuries, inflicted with a broken instrument" during their detention. It is also reported that a Sworn Administrative Inquiry conducted by the police recommended two officers be placed on

“temporary suspension” because “during the early hours of 8 May 1998 they behaved with exceptional brutality towards the two young.” According to the information received, three police officers were indicted for “jointly-induced bodily harm caused by a person, whose duties are the investigation of possible criminal acts, with the intent to extort deposition or an information” after the two youths pressed charges. It is alleged that following another Sworn Administrative Inquiry launched by the police, sanctions were imposed on two police officers. These sanctions were reportedly made in the form of an around 100US\$ fine. A third officer, the Director of the Security Service at the concerned police station, is reported to have been tried for these alleged beatings. He is believed to have been accused of “not preventing the ill-treatment of the two arrested individuals” but to have been eventually acquitted for lack of evidence on 8 October 2001.

55. **Andreas Kalamiotis**, a 21-year-old Roma, was reportedly arrested and beaten by police officers on 15 June 2001 in Pefkakia, Agia Pefkakia region. According to the information received, he was listening to music with some friends at his house when at around 2 a.m. a police officer requested them to turn the music off. (...) One of the officers allegedly pointed his gun at him and threatened with shooting him. He is reported to have been subsequently handcuffed and arrested. It is reported that as he was barefoot his wife tried to fetch him a pair of shoes but the latter was not allowed to do so. He was allegedly dragged to a police car and beaten with the hands and with truncheons. It is alleged that he was kicked after he fell on the ground. He is believed to have been beaten in the car as well and to have been taken out of the car and beaten again. He was allegedly interrogated about who had allegedly fired with a carbine. (...) He was reportedly taken to a police station where he was allegedly insulted and threatened by a police officer. According to the information received, when he asked for some water to drink he was told to take some from the toilet and was given proper water only half an hour later. On the following day he was reportedly taken to the police headquarters in Athens in order to take some pictures of him. It is alleged that when he asked to have his handcuffs removed in order to be able to sit down properly he was insulted and threatened again. He is reported to have been subsequently brought before a public prosecutor and accused of resisting arrest, insulting and threatening the police authorities. The Special Rapporteurs have been informed that he went to the forensic service in Aghias Anapafseos street, and there was allegedly told that in order to be examined by a forensic expert he had first to press charges or submit a complaint to the Police Station of Agia Paraskevi. Andreas Kalamiotis is believed to have avoided filing a complaint for fear of retaliation.

56. **Theodore Stefanou**, a 16-year-old Roma boy from Patras, was reportedly beaten by a police officer in Argostoli on 4 August 2001. According to the information received, two or three police officers went and looked for him in a truck in which he was sleeping during his stay in Argostoli but did not find him since he was outside. It is reported that when Theodore Stefanou learnt that the truck had been searched, he went to the police station. There he was reportedly questioned about the theft of an important sum of money from a kiosk. The boy is believed to have been punched and slapped in the face during 15 minutes by a policeman (whose name is known to the Special Rapporteurs) and in presence of two other officers, one of which is thought to be the Commander of the Argostoli Police Station. It is alleged that he was then taken handcuffed to his truck and subsequently brought back to the police station where he was reportedly interrogated and beaten again. He is reported to have been released after the owner of the kiosk stated that he did not see him around his kiosk at the time of the theft. The Special

Rapporteurs have been informed that he subsequently went to a hospital and that according to a medical report, he was found to be suffering from a head injury caused by beating received 12 hours earlier, a slight weakness in focusing, swelling and sensitivity on the ridge of his nose and a small frontal left bruise. It is reported that on 7 August 2001 he went to the Prosecutor's Office in order to press charges against the Commander of the Argostoli Police Station. According to the information received, four other Roma relatives, **Nikos Theodoropoulos**, aged 18, **Nikos Theodoropoulos**, **George Theodoropoulos** and **Vasilis Theodoropoulos** were arrested and taken to the same police station in relation to the same alleged theft. Nikos Theodoropoulos was reportedly taken to a room where the police commander and another officer allegedly interrogated, beat, punched and slapped him and stepped with their boots on his almost naked feet. Nikos Theodoropoulos is reported to have been kept in custody and to have been woken up at 4 a.m. to record an official deposition. He was reportedly beaten again when he allegedly said that he would not sign anything without the presence of a lawyer. It is believed that he eventually signed an allegedly false deposition in which he confessed to the theft. Nikos Theodoropoulos was reportedly beaten as well. According to the information received, Nikos Theodoropoulos was acquitted on 6 August 2001 after the judge took into consideration his version of the facts and the allegations of ill-treatment.

2. Response of the Greek Government dated 28 November 2002

57. **Lazaros Bekos** and **Eleftherios Koutropoulos**, both minor Romanies were arrested on 8 May 1998 at 00.45 by a police patrol in Mesolongi, while they were trying to burgle a kiosk. They were brought to Mesolongi Police Station and the next day, were brought before the competent prosecutor who released them after fixing a date for their hearing. While the minors did not file a complaint during their detention or at the prosecutor's office, after their release, they complained to the Helsinki Watch Greek Branch that they had been abused by police officers. The organization accompanied both minors to the State Hospital of Mesolongi. A medical report of the examination of both minors stated that they were bruised. A second medical report, produced after the consultation of a private doctor indicated that the first minor had two ecchymoses and the second one had multiple ecchymoses inflicted by a battering object. Following a written denunciation by the NGO in question, an administrative inquiry was conducted. No definite conclusions could be drawn as to when, how and by whom the minors' moderate injuries had been inflicted. Nonetheless a disciplinary sanction was imposed to the Commander of the Security Department of Mesolongi for insufficient supervision and control of his subordinates, since their injuries had been probably inflicted during their detention, although the possibility that they had been caused during their arrest, in which citizens participated, cannot be ruled out. The sanction made to the Deputy Commander was revoked after the minors testified under oath that he had not participated in their questioning. Criminal proceedings were instituted against three police officers. The case was brought to the Judicial Council, which discharged two police officers and committed to trial the Commander of the Police Station. He was later acquitted by a three-judge court of appeal in Patras, because it was ascertained that the injuries documented by the coroner were most probably caused during their arrest, as they both engaged in a violent fight with the owner of the kiosk.

58. **Andreas Kalamiotis** was arrested after police arrived at his home following a complaint by neighbours that he was disturbing their peace by playing loud music. The police officers recommended to him and three (3) other persons who were enjoying with him to switch off the music because it was disturbing the neighbours. However, he refused and moved threateningly

towards the officers, who withdrew to ask for help. Six (6) patrol cars rushed to help them. When Mr. Kalamiotis saw them, he withdrew into his dwelling, while his three friends did not resist and were brought to the Police Station of Agia Paraskevi for identification and later they were released.

59. Mr. Kalamiotis finally exited his dwelling after being invited to do so by the police officers, but he turned against them and swore at them. When they tried to arrest him they met stiff resistance, which led to a fight. He was handcuffed and brought to the Police Station, where he was unfettered, only to be handcuffed again because he unsuccessfully tried to assault a policeman. The general impression was of a behaviour suggesting alcohol abuse.

60. A criminal case file was opened against him for resistance against the authorities, insult and threat and he was brought before the competent public prosecutor, who instituted criminal proceedings against him and committed him to trial.

61. The administrative inquiry revealed that the two police officers who had participated in the arrest, detention and committal of Mr. Kalamiotis had acted legally, as Mr. Kalamiotis had used violence against them and refused to comply with their orders and follow them to the Police Station, contrary to his friends, who followed the policemen and no violence was used against them. According to the inquiry, the scratches he had suffered had been caused by the resistance he offered to avoid being handcuffed by the policemen and his fight with them. They were minor scratches and grazes, absolutely compatible with the amount of violence used against him. The denunciation that his wife was not allowed to give him shoes proved false, as a police officer gave him his shoes in the Police Station, but he threw them away. His allegation that twenty (20) patrol cars of the Hellenic Police had gone to his house was also false.

62. According to the data kept in our Service, the above mentioned proves did not file a complaint against police officers, while it is not clear whether or not he requested to be examined by a coroner. It should be noted that during his detention and when he was brought before the public prosecutor he did not ask to file a complaint against police officers or to be examined by a doctor.

63. The sworn administrative inquiry that was conducted to investigate the denunciations revealed that they were ungrounded, as the persons that were allegedly abused testified under oath that no one had mistreated them, except for minor **Theodoros Stefanou**, who claimed that a policeman had used violence against him, in the presence of the Commander, an allegation that was not corroborated by any other witness statement, although at least five (5) more Romanies were present in the Department during his stay there.

64. The denunciation that **Romani Nikos Theodoropoulos** was tortured and forced to sign a statement confessing a robbery he had not committed is not true, because the criminal case file that was opened against him and three other Romanies for the said robbery does not contain any such confession.

65. According to the certificate issued by the Hospital of Argostoli, where **Stefanos Theodorou** went on 5 August 2001 at 07:30 after leaving the Security Department of Argostoli, his examination showed that he was suffering from “a reported head injury, caused by beating 12 hours before. He complains about dizziness and strong headache”. According to testimonies by

other witnesses and to his statement, when he went to the Security Department his arm was tied and he was in pain, which (in conjunction with the possible time of infliction of the injuries according to the hospital's certificate) leads to the conclusion that they had been caused under unspecified circumstances before he voluntarily went to the Security Department at 00:40 that day.

66. According to the correspondence kept in our Service, none of the said Romanians filed a complaint against police officers.

3. Observations du Rapporteur special

67. Le Rapporteur spécial remercie les autorités grecques de leurs réponses. Il recommande que les forces de police continue d'éviter de recourir à l'usage disproportionnée de la force pour mener des arrestation. Par ailleurs il suggère que, lorsque cela est possible, il soit recouru à la médiation pour résoudre les problèmes de voisinage entre Rom et d'autres populations grecques. Par ailleurs, le Gouvernement grecque pourrait ouvrir un dialogue avec les représentant de la communauté Rom sur les moyens de créer une harmonie sociale avec leurs compatriotes.

**E. Guyana**

1. Communication dated 31 October 2002

68. It has been reported that the social and political life in Guyana is marked by constant ethnic tensions between the Indo-Guyanese and the Afro-Guyanese populations.

69. There is a perception in the Afro-Guyanese community that the Indo-Guyanese community has benefited financially and politically in the country at their expense. Furthermore, the lack of confidence between the Afro-Guyanese and Indo-Guyanese communities is allegedly attributed to the constant fear and palpable threat of violent crimes and racially motivated police brutality. Violent crime, including harassment, beating and robbery of Indo-Guyanese, are predominantly perpetrated by members of the Afro-Guyanese population and in many cases also originate from persistent opposition and street protests. The Afro-Guyanese population alleges widespread discrimination against them in politics, education, employment and housing and extra-judicial killings by the police.

70. The racialisation of national politics is allegedly translated into the political sphere and the division of the electorate along racial lines, Afro-Guyanese giving their allegiance mostly to the Congress/Reform (PNC/R) and Indo-Guyanese supporting mainly the People's Progressive party/Civic and the People's National (PPP/C).

71. In April 2001, after his election, President Bharrat Jagdeo who is the leader of PNC/R met Mr. Desmond Hoyte the leader of the People's National Congress/Reform (PNC/R) and they committed themselves to working to reduce ethnic tension and social unrest. However these commitments failed to bear any fruit, as the outbreak of violent crime continued, killing several people, including eight policemen.

72. The most recent manifestation of this racial cleavage occurred on 3 July 2002, when several demonstrators, including supporters of the PNC/R, broke through the gates of

Presidential complex, overturned and burned several cars, and torched and looted nearby stores. Police shot and wounded about eight of the protesters and arrested 17, including two of the alleged leaders. The President's office blamed the attack on the opposition party, describing it as an attempt to assassinate the President and topple the government

2. Response of the Government of Guyana

73. In a letter dated 3 December, the Permanent Representative of Guyana indicated that the letter of the Special Rapporteur was only received on 25 November 2002 and that his Government will be responding as soon as possible.

3. Observation by the Special Rapporteur

74. The Special Rapporteur is looking forward to the response of the Government of Guyana which will be reflected in his next report to the Commission.

## F. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1. Joint communication of 13 September 2002, sent together with the Special Rapporteur on Torture

75. **Zahid Mubarek** was reportedly beaten to death with a table leg by his cell mate, Robert Stewart, in Feltham Young Offenders Institution and Remand Centre, Middlesex, in March 2000. Robert Stewart was said to have been convicted of murder later in the year. An internal prison service investigation into this murder is believed to have identified a number of management failures and other major problems affecting Feltham. It is also reported that this investigation concluded that the establishment was institutionally racist. Management was reportedly aware of racist abuse against both staff and inmates belonging to ethnic minorities and of the measures which it should take to address the problem, but failed to take action. According to the information received, Zahid Mubarek was indeed placed in the same cell as Robert Stewart, even though prison officers were, or should have been, aware of Robert Stewart's racial prejudices and violent behaviour. Robert Stewart was on remand charged under the Harassment Act with sending racially-motivated malicious communications, including a letter in which he stated that he would consider killing his cell mate in order to get "shipped out" if he did not get bail when he appeared in court on 7 February. On 5 October 2001 the High Court is said to have ruled that the Home Office should initiate a public and independent investigation into the failures which led to the death of Zahid Mubarek. The judge is reported to have stated that, as there would not be an inquest into the death of Zahid Mubarek, the obligation to hold an effective and thorough investigation could only be met by holding a public and independent investigation with the family legally represented, with disclosure to the family's representatives of relevant documents and with the right to cross-examine the principal witnesses. The Home Office reportedly decided to appeal against the ruling, maintaining that there were sufficient investigations into the killing in connection with the trial of Robert Stewart and through the internal prison service investigation mentioned above. In March 2002 the Court of Appeal ruled that a public inquiry was not necessary. The Court of Appeal judges said that it had already been established that the prison service was at fault, an inquiry into this had been held and the family invited to be involved; that the cause of death had been established by Robert Stewart's conviction for murder; and that there was no basis for prosecuting any member of the prison



service. They also added that there were no “factual unknowns” which would impede the family from bringing a claim in the civil courts for damages. The family of Zahid Mubarek were reportedly planning to appeal to the House of Lords.

## 2. Response of the Government of the United Kingdom

76. On 18 November 2002 the Home Office of the Government of the United Kingdom responded to the joint allegation stating that “this was a wicked crime which occurred while Zahid was in the care of the Prison Service. He and his family had a right to expect he would be looked after safely, but the Prison Service failed to do so.

77. Since the tragic death of Zahid, a number of measures have been introduced to ensure that such a tragedy does not re-occur. These include the introduction at Feltham of procedures for risk assessments for cell sharing. These were initially trialed at Feltham and introduced nationally in June 2002. In addition, an improved healthcare screening process is being introduced to better identify prisoners with serious physical and mental health problems. Procedures are also being developed to ensure a better exchange of information between Prison Service and external agencies when a prisoner comes into custody.

78. The Director General of the Prison Service has admitted that the Prison Service is institutionally racist and is determined to rid the Service of all forms of racism. He is also determined to eradicate discrimination in the treatment of prisoners. Much progress has been made since Zahid’s death. Meanwhile an investigation by the into race relations within the Prison Service, which has been underway for almost two years, is now nearing completion.

### **Zahid Mubarek**

79. While the summary of the allegations as set out in the annex to the letter of the Special Rapporteurs are broadly accurate, the facts of the tragic incident are as follows:

- On 21 March 2000, at approximately 03:35 hours, a call alarm was activated in the Swallow Unit at HM Young Offenders Institute & Remand Centre Feltham. On attending, the officer on duty saw that one of the occupants, Zahid Mubarek, was lying in bed badly injured. The other occupant, Robert Stewart, has a stick in his hand that looked like a table leg. The scene confronting staff suggested that Zahid had been badly beaten around the head with this table leg.
- Staff arrived on the scene, including Healthcare staff who administered first aid to Zahid. Although his injuries were extensive, he was still breathing and not bleeding heavily. Staff continued to administer first aid until the paramedics arrived. Zahid was then taken to Ashford General Hospital at 0436 hours and was later transferred to Charing Cross Hospital. Tragically, he died on 28 March 2000 as a result of the injuries sustained.

80. The following circumstances should be taken into account when assessing the implications of this allegation.

- The assertion that staff knew that Robert Stewart was racist is not totally correct. Neither the warrants of the court nor the list of Mr. Stewart's pre-convictions provide any evidence to suggest that he was a racist. Although it has since been suggested that the harassment offence for which he was remanded in custody was racially motivated the only indication that this might be the case is a production order served at HM Prison Altcourse in November 1999 where it recorded that Robert Stewart was a suspect in an allegation of racially motivated malicious communication and harassment. There was no mention of any racial motivation on the subsequent Court Warrants;
- No other evidence that Robert Stewart exhibited racist behavior towards prisoners or staff during his time at Feltham was found. He shared a double cell with Zahid Mubarek from 8 February onwards with no apparent problems until the tragic event of 21 March. During this time, Zahid made no complaints against his cell-mate nor did he request to move cells;

#### Present status of any uncompleted investigation

81. The director General of the Prison Service, Martin Narey, also asked the Commission for Racial Equality (CRE) in November 2000 to consider the circumstances leading to this death as part of its wider ranging investigation into racism in the Prison Service. This investigation is now nearing completion.

#### Compensation

82. Compensation of £20,000 was offered to the family of Zahid Mubarek in September 2001. They have not yet responded formally to this offer.

#### Any other information/Observations

83. The investigation highlighted a number of areas at the prison where improvements were necessary. In all it made 26 recommendations addressing areas such as screening on reception, and the availability and scrutiny of medical records; Protection from harassment procedures; policy and procedures for reading and stopping mail; the availability of security information files from previous establishments; security, reception and Duty Governor training; and the searching strategy. Of these 26 recommendations, all but one have been implemented in full. The outstanding recommendation concerned the provision of a single "stopped letter" register each wing. This was felt to be unworkable and a single register had been provided for the entire establishment.

84. The part of the investigation on racist behavior led to the conclusion that Feltham was institutionally racist. This conclusion was based on the fact that there was clear evidence of a lack of understanding of racism and race relations amongst staff as well as including the suggestion that a minority of staff did behave in a racist manner to their colleagues and to prisoners

85. It should be noted that, following her inspection of Feltham in January 2002, which was published on 15 October 2002, Her Majesty's Chief Inspector of Prisons was very positive about

improvements at Feltham in general, and in particular about race relations. She noted that “the Governor and his staff has shown a major commitments to good race relations” and commended “the very considerable efforts that were demonstrated in a wide range of initiatives across the whole of the establishment”.

3. Observations of the Special Rapporteur

86. The Special Rapporteur would like to thank the Government of the United Kingdom for the detailed response to his communication. The Special Rapporteur welcomes the numerous measures put in place both at Fetham and at the national level, since the tragic murder of Zahid Mubarek, to ensure that such atrocities do not re-occur in the future. Furthermore, the Special Rapporteur considers that grave recognition that the Prison Service is institutionally racist leaves the authorities with a critical responsibility to combat all aspects of racism in this environment in an urgent manner. In this connection, the Special Rapporteur would greatly appreciate receiving the findings of the investigation on racism in the prison service upon its completion by the Commission for Racial Equality. The response of the Government of the United Kingdom refers to the fact that the Director General is “determined to rid the Service of all forms of racism” and that considerable efforts have already made to improve race relations in Feltham. The Special Rapporteur would welcome receiving more information on these efforts and the concrete measures which have been put into practice to address the problem of racism.

-----